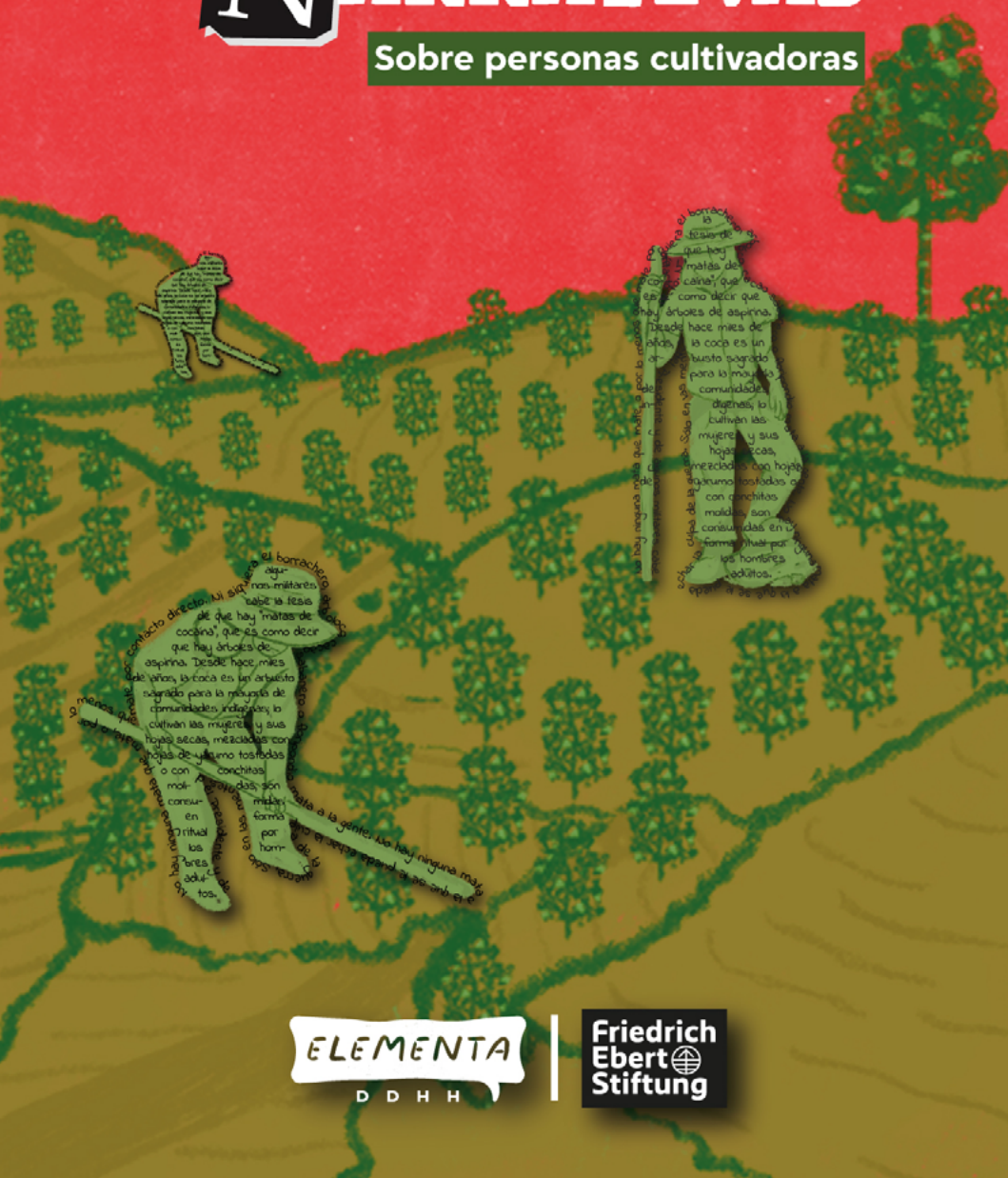


DESINTOXICANDO NARRATIVAS

Sobre personas cultivadoras



...que hay
...malas de
...cañal que
...como decir que
...hay árboles de aspirina.
Desde hace miles de
la copa es un
huevo sagrado
para la mayoría
comunales.
algunas lo
cultivan las
mujeres y sus
hijas secas,
mezcladas con hojas
de algunos árboles o
con conchitas
molidas, son
consumidas en
forma de
los hombres
reditos.
opon a se los

...el barrachón
...que
...nos mirarán
...sobre la fiesta
...de que hay 'matas de
...cocina', que es como decir
...que hay árboles de
...aspirina. Desde hace miles
...de años, la copa es un
...sagrado para la mayoría de
...comunidades indígenas, lo
...cultivan las mujeres y sus
...hijas secas, mezcladas con
...hojas de algunos árboles o
...con conchitas molidas, son
...consumidas en forma de
...los hombres reditos.
opon a se los

...el barrachón
...que
...nos mirarán
...sobre la fiesta
...de que hay 'matas de
...cocina', que es como decir
...que hay árboles de
...aspirina. Desde hace miles
...de años, la copa es un
...sagrado para la mayoría de
...comunidades indígenas, lo
...cultivan las mujeres y sus
...hijas secas, mezcladas con
...hojas de algunos árboles o
...con conchitas molidas, son
...consumidas en forma de
...los hombres reditos.
opon a se los

DESINTOXICANDO NARRATIVAS

Sobre personas cultivadoras



1a Edición, Bogotá, abril 2026.

© Elementa DDHH

www.elementaddhh.org

El presente proyecto ha sido elaborado por Elementa DDHH, con el apoyo de Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia - FESCOL.

Coordinación del proyecto

Paula Aguirre Ospina

Investigación y redacción del documento

Esteban Linares Sanabria

Jorge Forero Neme

Diseño editorial y diagramación

Angélica Linares Rodríguez

Forma recomendada para citar

Elementa DDHH (2026). Desintoxicando Narrativas: Sobre personas cultivadoras. Bogotá, Colombia.

ISBN: 978-958-52704-4-2

El texto en la ilustración de la portada fue extraído de la columna “La mata que mata” de Alfredo Molano Bravo publicada en El Espectador en 2009.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

Impreso por Cima Gráficas S.A.S.

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

ÍNDICE



01 ¿Por qué desintoxicar narrativas sobre personas cultivadoras?

Pág. 07

02 Colombia: Criminalización, coca, cannabis y amapola

Pág. 10

03 Rostros y Territorios: Geografía humana de los cultivos

Pág. 24

Roles y rostros: ¿quién está detrás de las plantas?

Pág. 26

Geografías de resistencia: cuatro territorios clave

Pág. 30

04 La construcción mediática

Pág. 44

Fabricando al "culpable"

Pág. 46

¿Quién tiene la palabra?

Pág. 53

El poder de nombrar

Pág. 58

Metáforas letales

Pág. 63

Ellos y nosotros

Pág. 68

Lo que no se dice

Pág. 72



05

¿Qué no hacer?

Pág. 77

06

¿Qué sí hacer?

Pág. 80

07

Checklist para saber si estoy informando de manera responsable

Pág. 83

08

Palabras finales

Pág. 87

09

Referencias

Pág. 90



01

¿POR QUÉ DESINTOXICAR NARRATIVAS SOBRE PERSONAS CULTIVADORAS?



Durante más de medio siglo, el discurso de la “guerra contra las drogas” ha servido como un mecanismo legitimador de violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo. **Amparado en el sistema internacional de prohibición de sustancias psicoactivas, este paradigma se ha perpetuado gracias a la construcción y reproducción sistemática de estereotipos negativos sobre quienes mantienen cualquier tipo de relación con estas plantas.** Históricamente, se ha adjudicado a estos actores la responsabilidad exclusiva sobre los efectos más graves de la política prohibicionista: desde los impactos en la salud pública y el crimen organizado, hasta la corrupción y la inestabilidad política y económica de las naciones.

Como consecuencia, se han arraigado en la sociedad narrativas discriminatorias que avalan acciones para eliminar un supuesto “peligro inminente”, incluso cuando ello implica vulnerar la vida y la dignidad de las personas¹. **Esta estigmatización afecta de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad —comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes—, donde factores interseccionales como el género, la orientación sexual, la edad, la clase y el territorio agudizan las condiciones de exclusión**². En este proceso, los medios de comunicación y los discursos públicos de tomadores de decisiones han sido cruciales para consolidar estos imaginarios, utilizando un lenguaje que asocia directamente a los productores de plantas con potencial psicoactivo con conductas delictivas y amenazas sociales, amplificando así el miedo y favoreciendo la adopción de medidas punitivas por parte del Estado³.

Cuando nos referimos a narrativas, no hablamos simplemente de una forma de comunicar información, sino de una práctica social que construye realidades y reproduce relaciones de poder⁴. Los discursos, ya sean mediáticos, políticos o institucionales, rara vez son neutros. Estos establecen jerarquías, naturalizan desigualdades y moldean el imaginario colectivo sobre determinados grupos sociales⁵.

¹ Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, «Caso “De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas” Consumo y usuarios de drogas en las violencias y persistencias del conflicto armado colombiano»; Ospina Águirre y Muro Polo, «Desintoxicando Narrativas: Kit de herramientas para garantizar el acceso a la información en política de drogas».

² Elementa DDHH (2024), «Desintoxicando Narrativas: Desafiando estereotipos sobre Mujeres y drogas». Bogotá, Colombia.

³ Elementa DDHH (2020), «Desintoxicando Narrativas: Kit de herramientas para garantizar el acceso a la información en política de drogas». Bogotá, Colombia.

⁴ Dijk, «Análisis Crítico del Discurso».

⁵ Mejía Cáceres, «Representación de Actores Sociales e Ideologías en los discursos del “Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera en Colombia”».

Las narrativas estatales o informativas sobre la coca, el cannabis y la amapola revelan estructuras, omisiones y polarizaciones que permiten ejercer poder y posicionar a ciertos sujetos, en este caso las personas que se relacionan con el cultivo, como ilegítimos, peligrosos o como un otro que amenaza al resto de la sociedad.

Ante este panorama, identificar las herramientas, técnicas y discursos replicados a lo largo de los años, hace posible proponer un cambio que reconozca y proteja los derechos humanos. **De esta forma, se evita que el dogma prohibicionista se imponga sobre la dignidad de las personas y se reconocen los contextos complejos de quienes derivan su sustento de estos cultivos.** Este documento busca contribuir precisamente a la transformación de las narrativas tóxicas y estigmatizantes. Lo hace mediante la reconstrucción y el cuestionamiento de los discursos que han moldeado los imaginarios actuales, integrando un análisis crítico que expone las voces de las poblaciones involucradas, los diversos roles desempeñados en la producción y las reflexiones acumuladas del producto Desintoxicando Narrativas en sus versiones anteriores.

La construcción de este documento adopta un enfoque interseccional. Esta perspectiva reconoce que identidades sociales como el género, la etnicidad, la clase o el territorio no operan aisladamente, sino que se superponen creando experiencias únicas de opresión y resistencia. Por tanto, no hablaremos de “las personas cultivadoras” como un grupo homogéneo, sino que buscaremos visibilizar cómo las políticas punitivas afectan distintamente a una mujer cabeza de hogar, a un joven indígena o a una comunidad afrodescendiente.

El texto se estructura en cinco secciones fundamentales que guían al lector desde la teoría hacia la práctica. Inicialmente, se desarrolla la metodología de investigación que orienta el producto, para luego abordar la necesidad urgente de desintoxicar las narrativas, analizando las implicaciones del sistema de prohibición. Posteriormente, se presenta una caracterización profunda de las personas cultivadoras, explorando su historia, ubicación geográfica y demografía. A continuación, se exponen los hallazgos derivados del análisis documental y del trabajo de campo. Finalmente, se ofrecen recomendaciones prácticas sobre cómo informar éticamente acerca de las personas vinculadas a la producción de plantas con potencial psicoactivo.

02

COLOMBIA: CRIMINALIZACIÓN, COCA, CANNABIS Y AMAPOLA

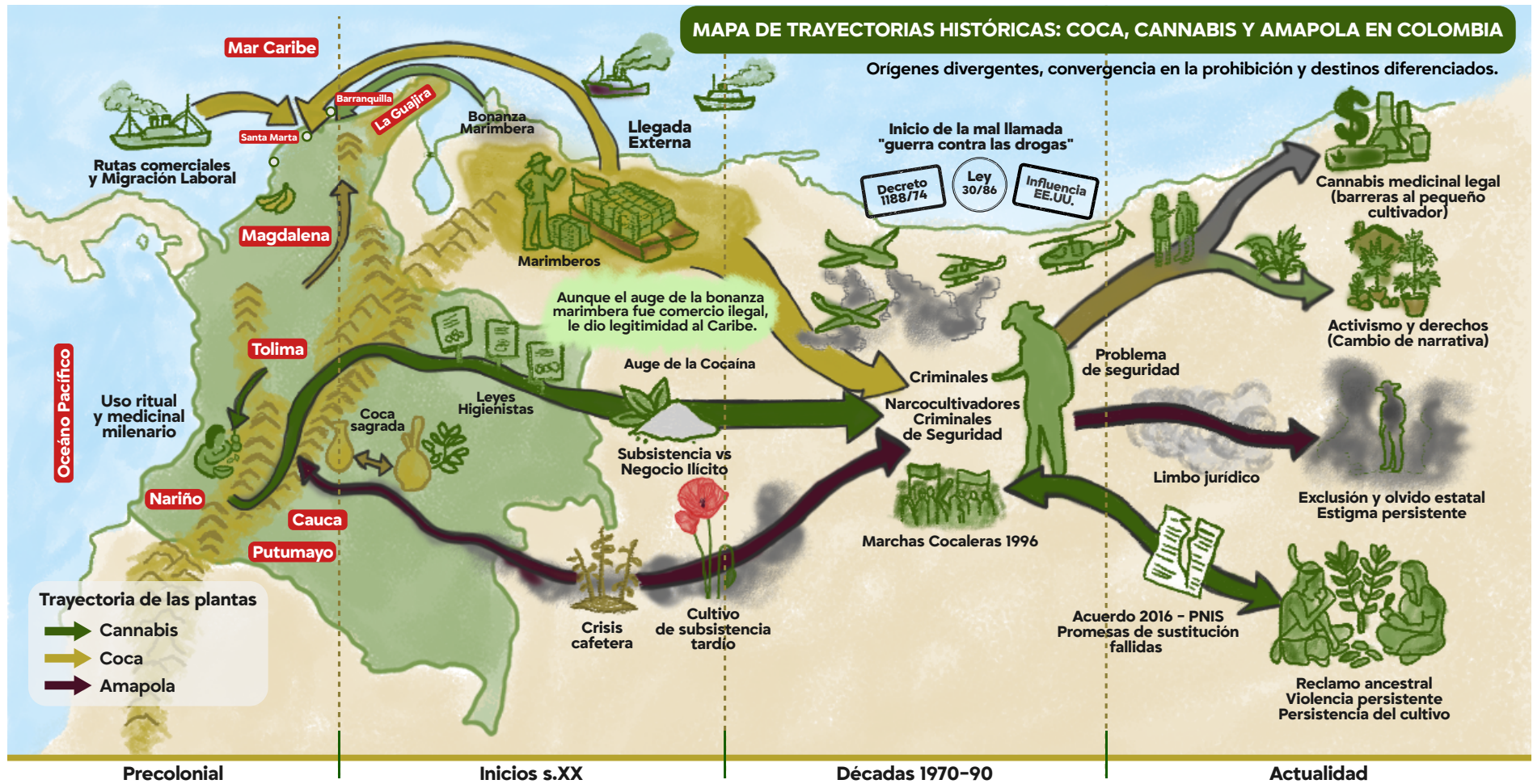
Ahondar en las trayectorias históricas de las plantas declaradas ilegales es fundamental para desentrañar las narrativas tóxicas. Aunque la coca, el cannabis y la amapola tienen orígenes, usos y significados culturales muy distintos, un siglo de políticas prohibicionistas les ha impuesto un destino común: la ilegalidad y la estigmatización. Este marco punitivo no ha operado de manera uniforme; cada planta ha recorrido un camino diferenciado en el territorio colombiano, generando formas específicas de persecución y representaciones sociales particulares sobre quienes las cultivan.

Este capítulo ofrece una dosis de información esencial para comprender cómo se entrelaza la historia de estas plantas con las dinámicas del conflicto, las economías locales y la construcción de estigmas. A lo largo de estas páginas, exploraremos en primer lugar las afectaciones del sistema prohibicionista posteriormente, analizaremos la evolución histórica y diferenciada de los cultivos a nivel nacional; y finalmente, profundizaremos en las realidades particulares de la coca, el cannabis y la amapola, sentando las bases para identificar quiénes son y dónde están las personas cultivadoras en Colombia.



Para visualizar esta complejidad antes de adentrarnos en las lógicas de la prohibición, la siguiente infografía sintetiza las trayectorias vitales de estas tres plantas. El recorrido gráfico revela un contraste fundamental: expone cómo la coca surge de una profunda memoria ancestral y comunitaria; cómo el cannabis irrumpió históricamente como una economía de oportunidad y arraigo regional en el Caribe; y cómo la amapola emergió en el silencio de las altas montañas como un estricto mecanismo de supervivencia para familias campesinas empujadas por el abandono estatal y las crisis agrarias.

Se hace evidente un escenario histórico de narrativa tóxica en donde el Estado agrupa realidades territoriales y culturales tan disímiles bajo el único y estigmatizante rótulo de "cultivos ilícitos". Esta visualización nos permite entender cómo la pluralidad de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes fue borrada progresivamente en el discurso, allanando el camino para justificar la represión.



Elaborado por Elementa DDHH.

El sistema de prohibición de drogas en Colombia ha sido mucho más que un conjunto de políticas públicas orientadas a la erradicación de usos no médicos o a la persecución del mercado. En la práctica, ha operado como un poderoso proyecto discursivo estatal que reconfiguró el territorio y la vida de sus habitantes. Esto se materializó mediante la militarización de la vida rural, la criminalización desproporcionada de los eslabones más débiles de la cadena y estrategias de erradicación forzada que violan derechos fundamentales a la salud, el trabajo y un ambiente sano.

La Comisión de la Verdad (CEV) demostró que este modelo narrativo no solo reconfiguró la doctrina militar, sino que funcionó como un escudo para exculpar al Estado por sus violaciones a los derechos humanos. Durante las marchas campesinas de 1996, la institucionalidad utilizó etiquetas estigmatizantes para deslegitimar la protesta social y justificar una violenta represión. Al fusionar deliberadamente las identidades del cultivador, el narcotraficante y el guerrillero, el discurso oficial fabricó a un "enemigo interno". El impacto de esta narrativa fue letal: despojó a las personas cultivadoras de sus derechos fundamentales y convirtió sus vidas en algo prescindible.

Así como con las personas, las narrativas del sistema de prohibición han dejado cicatrices profundas en los ecosistemas. Estas huellas fueron el resultado directo de imaginarios que concibieron el entorno natural como un campo de batalla⁶, allanando el camino para la guerra química y la expansión de la frontera agrícola hacia selvas y parques nacionales⁷.

Las narrativas de la prohibición permitieron un daño generalizado, y a menudo irreversible, sobre vastos territorios a cambio de la persecución inefectiva de una planta. La aspersión aérea con glifosato, vendida por el Estado como una solución tecnológica "eficiente", operó en la práctica como una herramienta de devastación indiscriminada. Su aplicación contaminó fuentes hídricas, envenenó suelos y arrasó con los cultivos de pancoger, aniquilando la seguridad alimentaria de las familias y provocando desplazamientos forzados. El resultado de esta catástrofe ambiental y socioeconómica fue un efecto bumerán: lejos de acabar con el problema, la destrucción del territorio empujó a las comunidades a depender aún más de la coca como su única alternativa real de subsistencia.



Elaborado por Elementa DDHH con base en el Informe Final de la CEV.



Elaborado por Elementa DDHH con base en *Guía para la acción judicial: Deforestación e impactos ambientales por la siembra de cultivos ilícitos y Fumigación con Glifosato en Colombia: Efectos, costos y alternativas.*

⁶ Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, «Caso "Campesinos cocaleros y su movilización en 1996: sujetos y territorios en disputa en el conflicto armado colombiano».

⁷ Esteban Linares Sanabria y Elementa DDHH, «La erradicación de cultivos: otra de las lógicas de la guerra en la naturaleza».

En Colombia, la coca, el cannabis y la amapola han recorrido caminos distintos. Mientras la coca ha hecho parte de las tradiciones de pueblos históricos de distintas regiones del país⁸, el cannabis y la amapola llegaron de otras regiones del mundo, y fueron cultivadas inicialmente para explotar sus usos psicoactivos con fines comerciales dentro de mercados ilícitos⁹. Esta historia de producción y prohibición también estuvo acompañada por formas de estigmatización diferenciada sobre las personas que se relacionan con cada una de estas plantas, por lo que para entender estas narrativas resulta central comprender su interrelación con circunstancias como la política internacional o el tipo de uso.



Estos efectos diferenciados se ejemplifican de manera clara con las narrativas alrededor de la hoja de coca y las personas que se relacionan con esta. Una planta que tradicionalmente había sido utilizada por comunidades indígenas y campesinas por sus diversos usos medicinales, pero que con el auge de la cocaína en la década de 1970, se convirtió, a la vez, en una fuente de subsistencia económica para diversas familias de la ruralidad colombiana y en el principal de las políticas prohibicionistas más agresivas¹⁰.

Desintoxicar narrativas parte del reconocimiento de que en la raíz histórica de la coca se encuentran elementos claves para apreciar la

⁸ Corte Constitucional colombiana, «Sentencia C-882 de 2011».

⁹ Ospina et al., «Poppies, opium and heroin. Production in Colombia»; Britto, *El boom de la marihuana*.

¹⁰ Oscar A. Alfonso R. et al., «Para voltear la hoja. Del moralismo y la criminalización a la industrialización de la coca».

complejidad de esta planta de poder, cuyo valor va mucho más allá de la controversia en torno a sus derivados. Al comprender la coca en su totalidad —como rito, medicina ancestral, materia prima de identidades comunitarias y objeto de regulaciones nacionales e internacionales— estaremos en mejores condiciones de impulsar un diálogo respetuoso sobre su futuro. Así mismo, consideramos que es un camino prioritario para poder desarticular las narrativas que han validado las condiciones de marginación que viven las poblaciones que se relacionan con el cultivo de esta planta de poder, y en consecuencia, construir, junto a las poblaciones mismas, nuevos discursos que se orienten al respeto de sus derechos humanos, al reconocimiento de sus saberes y a la toma de decisiones públicas basadas en la evidencia.



La hoja de coca ha sido un elemento esencial en las prácticas culturales y medicinales de los pueblos andinos, no es únicamente una planta, sino que es un puente entre lo material y lo simbólico. En Colombia, desde tiempos previos a la colonia y hasta la actualidad, las comunidades la empleaban para mitigar el hambre, combatir la fatiga y acompañar las largas jornadas de trabajo¹¹. Además, gracias a sus propiedades anestésicas y estimulantes, se utiliza con fines terapéuticos para

¹¹ Elementa DDHH, «Historia de la prohibición de la hoja de coca».

aliviar dolores de cabeza, el mal de altura, heridas e infecciones¹². Estas aplicaciones rituales y curativas subrayan el valor simbólico de la **coca**, el profundo conocimiento de sus alcaloides y su papel en el desarrollo de las comunidades.

En Colombia, **el mameo** ha sido la forma predominante de consumo tradicional. A lo largo del territorio nacional se hace uso de preparaciones con hoja de coca y la hoja misma para desarrollar la práctica de mameo¹³. Esta tiene, además de los anteriores usos, uno comunitario para la socialización, el afianzamiento de las relaciones comunitarias, y el aprendizaje y la memoria colectiva, entre otros¹⁴. Su uso no está vinculado al ánimo de producir cocaína, sino al bienestar colectivo y al mantenimiento de tradiciones. Esta práctica del mameo permite distinguir con claridad entre prácticas culturales que no están asociadas a la ilegalidad y los procesos industriales que dieron paso a la cocaína.

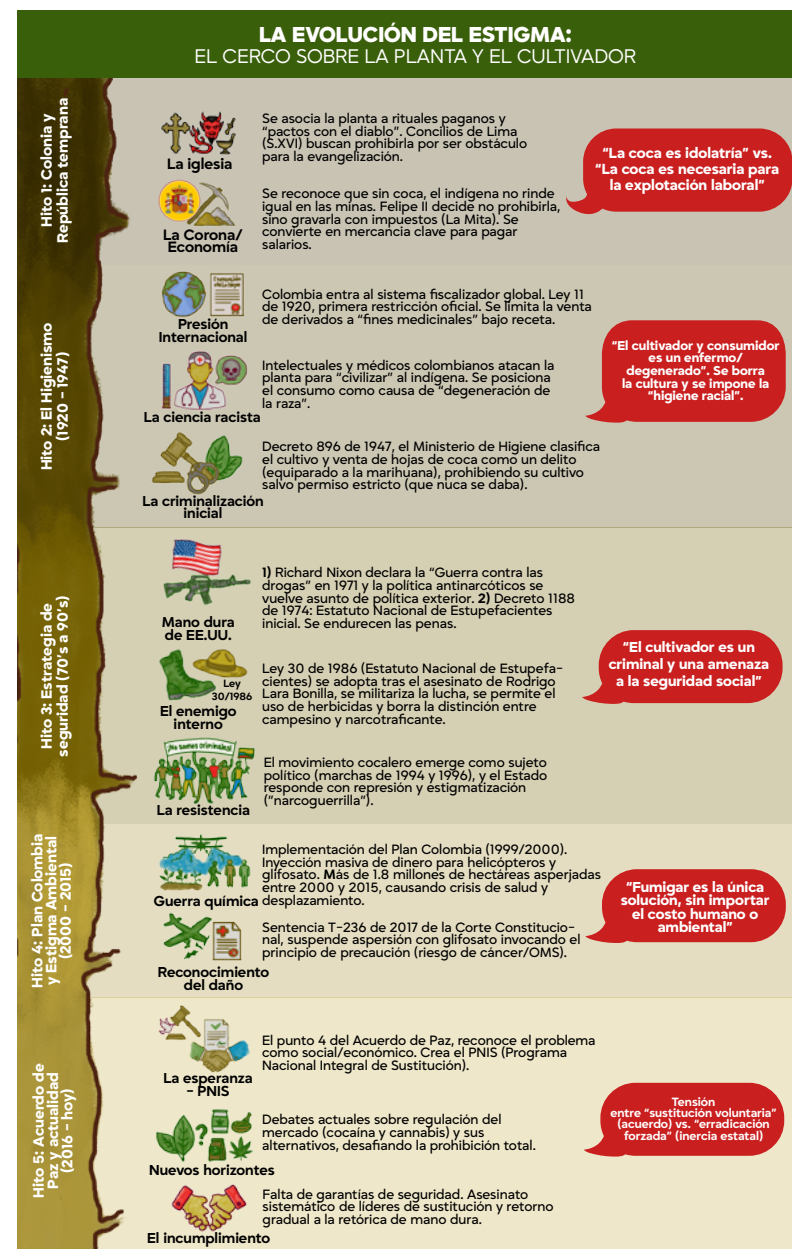
No obstante, así como ha sido histórico su uso también lo han sido las formas de control sobre las personas que se relacionan con la planta y sobre la planta misma. Esta tensión, presente desde las regulaciones coloniales y agudizada por las corrientes higienistas del siglo XX, derivó en un endurecimiento radical a partir de los años 70. Bajo la influencia de la «guerra contra las drogas», se consolidó un marco jurídico y militar que equiparó la hoja con estupefacientes industriales, priorizando la erradicación forzosa sobre el reconocimiento cultural. El resultado de estos mecanismos fue una visión unívoca de la coca como “problema de seguridad” que estigmatiza al campesinado.

Para dimensionar cómo se construyó y consolidó esta estigmatización a lo largo del tiempo, la siguiente infografía traza la ruta histórica y normativa de la coca. El recorrido visual expone la evolución del discurso estatal: desde la ambigüedad del periodo colonial y las lógicas higienistas, pasando por la violenta radicalización de la “guerra contra las drogas” en los años 70, hasta llegar al punto crítico de las marchas de 1996, donde el Estado respondió a las exigencias de supervivencia campesina con represión y la etiqueta criminalizadora de “narcoguerrilla”. Finalmente, esta línea de tiempo nos conduce hasta el hito discursivo de 2016, momento en el que, tras décadas de violencia institucional, se reconoció, con escasos precedentes, a las personas cultivadoras como sujetos políticos e interlocutores válidos.

¹² Ibid.

¹³ Elementa DDHH, «El mameo de la hoja de coca como una forma nutricional».

¹⁴ Herney Ruiz, «Coca Chewing Peasants»; Pablo Zuleta y Deysy Lorena Daza, «El mameo de la hoja de coca como una forma nutricional».



Elaborado por Elementa DDHH con base en *Historia de la prohibición de la hoja de coca, Desarrollo rural integral para cultivadores y cultivadoras de hoja de coca*, y el Informe Final de la CEV.

Si bien el Acuerdo de Paz de 2016 intentó fracturar este paradigma punitivo mediante el PNIS, la implementación de lo pactado ha sido precaria. Los programas de sustitución enfrentaron barreras estructurales en infraestructura y acceso a mercados, impidiendo una transformación real. Como consecuencia, la violencia no cesó; por el contrario, la persistencia de la estigmatización y las operaciones de erradicación detonaron nuevas formas de vulneración de derechos humanos contra las comunidades productoras —incluyendo homicidios, masacres y el uso de civiles en confrontaciones armadas—, manteniéndolas en una situación de vulnerabilidad crítica.

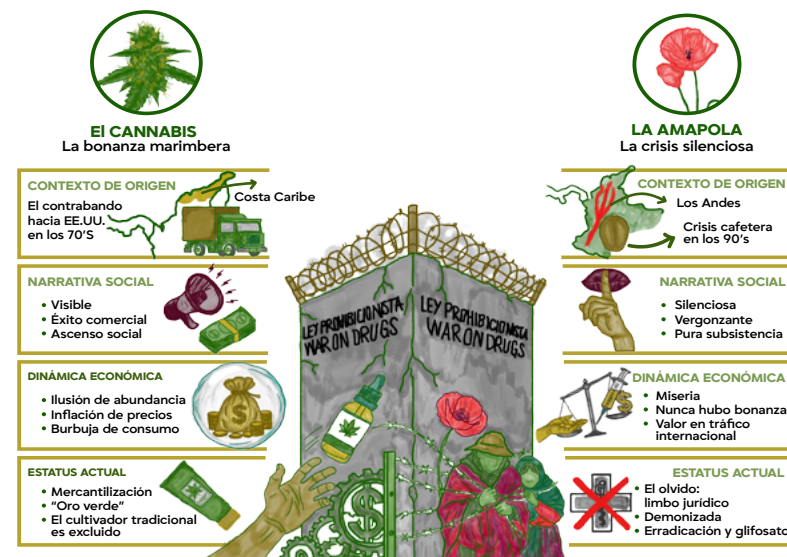


Las trayectorias del cannabis y la amapola en Colombia representan capítulos distintos pero que comparten una misma historia marcada por el sistema de prohibición, la violencia y la estigmatización. Mientras el cannabis se estima que llegó a principios de siglo XX como resultado de la migración laboral y las rutas comerciales que comenzaron a conectar la zona bananera y los puertos de Santa Marta y Barranquilla con el resto del Caribe¹⁵ y hoy transita hacia una práctica abierta y reivindicada, la amapola emergió en los años 80', como cultivo de subsistencia ante la crisis rural, permaneciendo hasta hoy asociada a un consumo oculto o vergonzante¹⁶. Comprender estos orígenes divergentes es fundamental para dismantlar las narrativas que han justificado políticas punitivas; sin embargo, más allá de sus diferencias históricas, ambos cultivos terminaron convergiendo en un escenario común de guerra y control.

¹⁵ Britto, «El boom de la marihuana», 2022.

¹⁶ Elementa DDHH, «Derechos en contexto Medellín».

DOS MUNDOS, UNA PROHIBICIÓN: El estigma desigual



Elaborado por Elementa DDHH con base en *Impacto social de la bonanza marimbera en la Costa Norte Colombiana y en Barranquilla, La Bonanza Marimbera: crónica de una tragedia anunciada, Amapola, opio y heroína, y Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia*.

Si bien los orígenes del cannabis y la amapola fueron disímiles, sus trayectorias terminaron por encontrarse inevitablemente bajo la sombra del conflicto armado. Fue en este escenario donde ambos cultivos sufrieron el impacto de actores que, en su disputa por el control territorial y las rentas de las economías ilícitas, transformaron radicalmente las dinámicas rurales. La participación de estos grupos armados trascendió el simple control militar; instauraron un orden que abarcó desde el cobro de impuestos y la construcción de bases sociales mediante la coerción, hasta el reemplazo de la institucionalidad estatal y el involucramiento directo en la cadena de producción y comercialización¹⁷. Esta simbiosis forzada se convirtió en el caldo de cultivo ideal para la construcción de narrativas estigmatizantes, las cuales terminaron por atrapar a los cultivadores en un fuego cruzado entre la violencia de los actores ilegales y la represión punitiva del Estado.

¹⁷ Díaz y Sánchez, «Geografía de los cultivos ilícitos y Conflicto armado en Colombia»; Thoumi, «Las FARC y el campesinado cultivador de plantas ilícitas».

El panorama actual refleja las profundas contradicciones de esta disputa de sentidos:

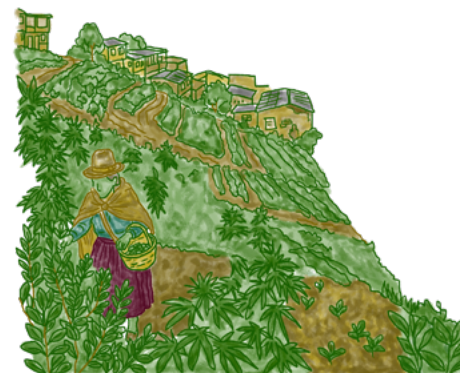
El Cannabis y la exclusión corporativa

- La planta ha sido **objeto de avances legislativos** e interpretaciones jurisprudenciales en clave medicinal y científica³³.
- Este modelo, diseñado bajo una lógica estrictamente industrial-farmacéutica, ha erigido **barreras técnicas y financieras** que impiden la integración de los pequeños cultivadores tradicionales.
- **Se perpetúan dinámicas de exclusión** donde la planta se convierte en una mercancía aséptica, mientras que el “cultivador histórico” —quien soportó la violencia de la prohibición— es rotulado ahora como “no apto” o “informal” para participar en el mercado legal que él mismo ayudó a cimentar.

La Amapola y el vacío narrativo

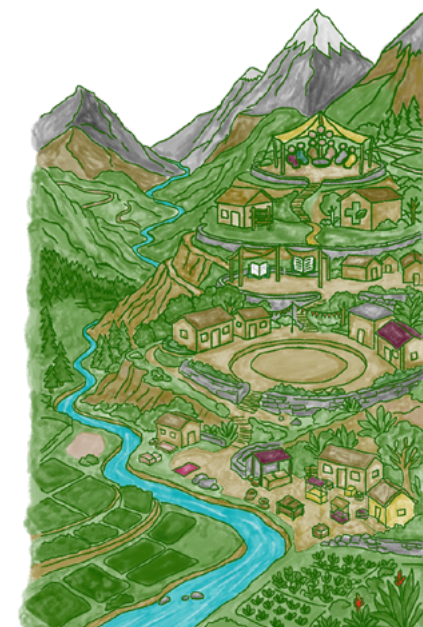
- La amapola permanece sumida en un **limbo jurídico y en un silencio absoluto**.
- Atrapada entre una **narrativa nacional casi inexistente y una robusta prohibición internacional**, tanto la planta como sus cultivadores carecen de un horizonte de futuro claro.
- La exclusión sistemática de esta conversación, sumada al abandono de programas de sustitución como el PNIS, **condena a las familias amapoleras a una inacabable zona de criminalización y subsistencia precaria**.

Frente a este horizonte de exclusión, desde los territorios han comenzado a emerger modelos de regulación comunitaria y movimientos sociales que desafían los enfoques estatales tradicionales. Estas iniciativas desarrollan contra-narrativas basadas en la autonomía y en los derechos de las comunidades cultivadoras y usuarias:



En los **centros urbanos**, el activismo cannábico construye un relato de libertades civiles¹⁹, promoviendo el autocultivo y los clubes sociales como una “tercera vía” que rompe la falsa dicotomía entre el mercado criminal y el monopolio corporativo²⁰.

Aún más contundente es la respuesta de las **comunidades del Cauca**. Al implementar sus propios sistemas de regulación basados en el “gobierno propio” y en su conocimiento ancestral de la planta, no solo exigen ser incluidos en el relato del Estado; están escribiendo el suyo propio²¹. Proponen una narrativa de soberanía territorial y pluralismo jurídico, donde su conocimiento y experiencia se reivindican como una fuente legítima de ley.



¹⁸ Rivera, «Los desafíos del cannabis medicinal en Colombia | Transnational Institute».

¹⁹ Esteban Linares y Elementa DDHH, «Cannábicas y cannábicos de Colombia: uníos».

²⁰ Kapkin, «¿Existe una causa común en la Marcha Cannábica de Colombia?»; Cruz, «Marihuana en Colombia».

²¹ Viso Mutop, «Impacto del Cannabis en el tejido social de la comunidad indígena en el Norte del Departamento del Cauca»; Carlos Espitia y Salomon Majbub, «La economía de la marihuana en el enclave productivo del Norte del Cauca».

03

ROSTROS Y TERRITORIOS: GEOGRAFÍA HUMANA DE LOS CULTIVOS



Para comprender la realidad actual de los cultivos de uso ilícito en Colombia, es necesario trascender la simple ubicación geográfica y observar quiénes son las personas que los sostienen. Si bien la coca, el cannabis y la amapola han tenido trayectorias históricas diversas, hoy asistimos a un claro fenómeno de concentración: la coca se agrupa mayoritariamente en Norte de Santander, Nariño, Cauca y Putumayo²²; mientras que la amapola y el cannabis –pese al vacío de datos oficiales– mantienen focos productivos evidentes en la alta montaña y el norte del Cauca (Caloto, Toribío, Corinto), respectivamente²³.

Sin embargo, para desintoxicar las narrativas no basta con mirar el mapa; es urgente ponerles rostro a las cifras e identificar la división del trabajo que a menudo se invisibiliza bajo términos criminalizantes. Bajo esta premisa, a continuación analizaremos las dinámicas en Catatumbo, la Amazonía, Nariño y el Cauca. Estas regiones, aunque comparten la persistencia de las economías ilegalizadas, presentan profundas diferencias en su organización social y étnica. Este recorrido permitirá evidenciar los impactos diferenciados en mujeres, jóvenes y comunidades, contrastando la estigmatización con las realidades locales.



²² Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), «Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023».

²³ El Espectador, «El pesebre de marihuana que crece en el norte del Cauca»; Espitia-Cueca y Majbub-Avedaño, «La economía de la marihuana en el enclave productivo del Norte del Cauca»; Serrano et al., *Caracterización agropecuaria del cultivo de amapola y de los territorios afectados - Síntesis de resultados de investigación*.

Roles y rostros: ¿quién está detrás de las plantas?

Los discursos oficiales y mediáticos han tendido a aplanar esta realidad bajo términos exclusivamente punitivos, invisibilizando la compleja red laboral y humana que sostiene estas economías de subsistencia. Es indispensable desmontar la figura del “criminal” abstracto para entender que detrás de cada hectárea cultivada no hay un enemigo del Estado, sino familias, vecinos y trabajadores que desempeñan oficios especializados. Sus vidas transcurren en una dinámica de trabajo agrícola cotidiano —con sus propias reglas, saberes y jerarquías— que desborda, por mucho, la simplicidad del estigma.

En el caso de la **coca**, la producción se sostiene sobre una estructura social diversa donde las mujeres juegan un rol central, aunque a menudo invisibilizado. En la base se encuentran los **cultivadores y cultivadoras**, generalmente núcleos familiares que gestionan parcelas pequeñas —de una hectárea en promedio— y cuidan la planta como su principal sustento²⁴. Junto a ellas aparecen **los y las recolectoras o “raspachines”**, una fuerza laboral flotante, compuesta a menudo por jóvenes y/o migrantes que se desplazan entre veredas según las temporadas de cosecha; su labor no se limita a raspar la hoja, sino que incluye la adecuación de tierras y la siembra²⁵. Finalmente, están **las personas quimiqueras**, quienes buscando mayores ingresos, asumen el riesgo de operar los laboratorios artesanales o “cocinas” para transformar la hoja en pasta base, un proceso que requiere conocimientos empíricos específicos²⁶.

Por su parte, la economía del **cannabis** ha desarrollado una especialización particular, especialmente en enclaves como el norte del Cauca. Aquí se distinguen **las personas cultivadoras** encargadas

²⁴ UNODC, «Colombia Monitoreo de Cultivos Ilícitos 2019».

²⁵ Ministerio de Justicia y del Derecho, «Características agroalimentarias de los cultivos de coca en Colombia».

²⁶ Cuesta Astroz et al., «Mujeres y economía cocalera en el putumayo».

de la agronomía del cultivo, la fumigación y el control de plagas. Sin embargo, una figura emblemática de esta cadena es la de las **“peluqueras”**, un rol mayoritariamente femenino²⁷. Ellas son contratadas específicamente para la post-cosecha, encargándose de “manicurar” la flor con tijeras, limpiando los residuos de hoja con destreza y rapidez. Una vez lista la producción, entran en escena los **mochileros**, intermediarios logísticos cuya tarea es transportar la cosecha desde las zonas montañosas de difícil acceso hasta los puntos de acopio²⁸.

Y en último lugar, el cultivo de **amapola** se distingue por ser una labor de cuidado intensivo y delicado. A diferencia de otros cultivos, la amapola no permite una mecanización fácil y depende casi exclusivamente de la mano de obra manual, requiriendo un promedio de 218 jornales (un día de trabajo realizado por cada persona) para la producción de una hectárea. Los **jornaleros del látex** son quienes sostienen esta economía; su trabajo se divide entre el mantenimiento del cultivo y una cosecha minuciosa que implica el rayado preciso del bulbo y la recolección manual de la “leche” o goma, una tarea que exige paciencia y técnica experta²⁹.



Elaborado por Elementa DDHH.

²⁷ Espitia-Cueca y Majjub-Avenidaño, «La economía de la marihuana en el enclave productivo del Norte del Cauca».

²⁸ Ibid.

²⁹ Ministerio de Justicia y del Derecho y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), «Caracterización agroalimentaria del cultivo de amapola y de los territorios afectados».

Más allá de los roles funcionales, la economía de las drogas ilícitas no opera en un vacío social; por el contrario, utiliza las profundas brechas de desigualdad del país para organizar su fuerza laboral. La interseccionalidad revela que la experiencia de la ilegalidad es radicalmente distinta dependiendo de quién la habita. No es lo mismo ser un patrón de finca mestizo en el Meta que una mujer afrodescendiente en Tumaco o un migrante indocumentado en el Catatumbo. El sistema productivo ilícito funciona como un espejo deformante del mercado laboral legal: altamente informal, generizado y racializado, pero sin las protecciones del Estado³⁰.



La participación de las mujeres ha sido sistemáticamente malinterpretada. Lejos de ser actrices pasivas, constituyen la columna vertebral logística de los enclaves, representando el 46.9% de los integrantes de las familias cocaleras³¹. Sin embargo, su inserción está marcada por una precarización extrema. En la división sexual del trabajo, roles como el de la "cocinera" son vitales para la productividad física de los recolectores, pero conllevan riesgos jurídicos desproporcionados, como estar en riesgo de ser procesadas por delitos relacionados con drogas. Por otro lado, las mujeres recolectoras enfrentan una brecha salarial de facto y riesgos diferenciados que afectan su salud reproductiva y que raramente son atendidos³².

³⁰ Garzón y Gélvez, «¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?»

³¹ Garzón y Gélvez, «¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?»

³² UNODC, «Análisis de la participación de las mujeres en la cadena de valor del narcotráfico»; Garzón y Gélvez, «¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?»

Igualmente, los territorios cocaleros son demográficamente jóvenes (41% menores de 19 años), pero estructuralmente hostiles³³. El trabajo infantil se normaliza como mecanismo de supervivencia: los niños se inician como recolectores enfrentando desgaste físico, y las niñas son absorbidas por labores domésticas invisibilizadas³⁴. Esta dinámica genera una "adultización" forzada y deserción escolar que crea una trampa de pobreza a largo plazo. Además, por la vinculación de la actividad productiva con actores armados ilegales el tránsito por dinámicas de reclutamiento forzado resulta desde su perspectiva más fácil³⁵.



El mapa de los cultivos se superpone casi exactamente con los territorios étnicos, evidenciando un racismo estructural y ambiental. En el Pacífico, por ejemplo, la economía ilícita ha erosionado prácticas culturales de comunidades afrodescendientes y seguridad alimentaria³⁶. A esto se suma la crisis migratoria. Las personas migrantes de Venezuela funcionan hoy como el nuevo proletariado de la coca: una mano de obra barata y sin derechos. Se les paga menos, se les asignan las tareas más tóxicas en los laboratorios y, si enferman, son descartados³⁷.

³³ Garzón y Gélvez, «¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?»

³⁴ Yanez et al., «Análisis de entrevistas realizadas a jóvenes cultivadores de coca y amapola en Colombia, Ecuador, México y Perú».

³⁵ Ibid.

³⁶ INDEPAZ, «Economías de los conflictos armados en Colombia».

³⁷ Monsalve, «Migrar para raspar coca».

Geografías de resistencia: Cuatro territorios clave

Al poner el foco en estas regiones, la premisa es clara: no estamos ante delincuentes, sino ante sujetos históricos que luchan por una vida digna. Aunque diversos entre sí, estos territorios comparten un patrón de abandono estatal crónico, donde la desproporcionada presencia militar contrasta con la ausencia de una reforma rural integral y de servicios básicos. En este escenario, la decisión de sembrar plantas ilegalizadas no nace de una “voluntad criminal”, sino que constituye una estrategia de supervivencia económica ante condiciones estructurales que hacen inviables las economías legales.

Históricamente, estas zonas han sido tratadas como fronteras de extracción y corredores de guerra. La coca, la amapola y la marihuana son solo el ciclo más reciente de una economía que agota los recursos sin dejar desarrollo local. Sin embargo, las comunidades se niegan a ser definidas por el narcotráfico; sus organizaciones sociales resisten proponiendo visiones alternativas de ordenamiento territorial que chocan, a menudo, tanto con los intereses de los actores armados como con la visión de un Estado que percibe estos espacios únicamente como focos a someter.

En consecuencia, la evidencia exige dejar de ver estos lugares como meros “enclaves de violencia” para comprenderlos como territorios complejos en disputa por la autonomía. La historia de estas regiones no es una crónica policial, sino una memoria de luchas superpuestas contra el despojo y la imposición de modelos de desarrollo ajenos. Desintoxicar la narrativa implica, entonces, reconocer que allí no habita el crimen, sino la resistencia.



Catatumbo

La región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, es quizá uno de los territorios más impactados por las narrativas tóxicas en Colombia. Su nombre en medios y en la cultura general evoca imágenes de violencia y guerra. Sin embargo, detrás de esta narrativa simplista se esconde una historia compleja de despojo, abandono y, sobre todo, de una tenaz resistencia campesina que lucha por construir un proyecto de vida digno en medio de disputas armadas que trascienden las fronteras nacionales.

La historia contemporánea del Catatumbo no comienza con la coca, sino con el petróleo. La instalación de empresas petroleras a principios del siglo XX marcó el inicio de un ciclo de violencia extractivista. Las comunidades indígenas Barí, habitantes ancestrales de este territorio, fueron perseguidas, desplazadas y asesinadas para dar paso a la explotación de hidrocarburos, en un proceso violento que contó con la participación de agentes estatales³⁸.

Paralelamente, la región se convirtió en un refugio para campesinos expulsados de otras zonas del país por la violencia bipartidista y la falta de tierras³⁹. Estas familias colonas se dedicaron inicialmente a cultivos legales, pero se enfrentaron a la ausencia de vías y la imposibilidad de comercializar sus productos⁴⁰. En este contexto, la hoja de coca apareció como una alternativa viable para la subsistencia⁴¹. Desde la década de 1980, la consolidación de la economía cocalera atrajo la presencia de grupos guerrilleros, lo que fue acompañado de la designación del territorio bajo el rótulo de “zona roja”, que significaba una aplicación de lucha contrainsurgente y una militarización intensiva del territorio⁴².

Esta estrategia fracasó en erradicar a los grupos armados o los cultivos, y por el contrario, ganó en profundizar la estigmatización de la población cultivadora. Como ya se vió en el capítulo 2, las organizaciones sociales, los sindicatos y los líderes comunitarios fueron sistemáticamente señalados como “fachadas” de los actores armados y narcotraficantes, lo que les restó autonomía, les negó legitimidad y justificó una brutal represión en su contra, incluyendo amenazas, torturas y asesinatos⁴³.

³⁸ Pérez Trujillo, «Catatumbo».

³⁹ Ibid.

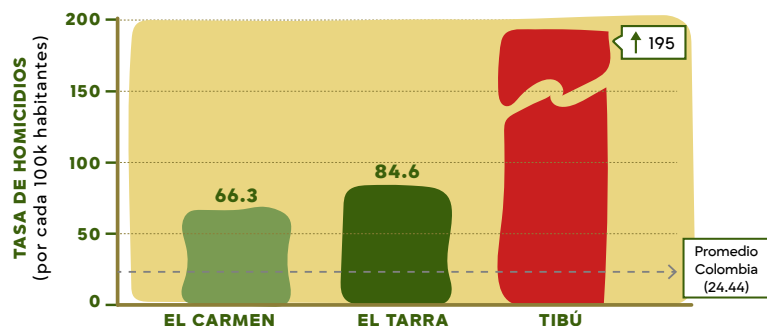
⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Connectas, «Los intereses detrás de la guerra en el Catatumbo».

⁴² Pérez Trujillo, «Catatumbo».

⁴³ Ibid.

La violencia en el Catatumbo



Contexto: NBI Rural (pobreza) = 60%

Elaborado por Elementa DDHH con base en *Tasa de Homicidios (Basada en reporte de homicidios de la Policía Nacional)*.

El territorio del Catatumbo, adquiere una capa de complejidad por su ubicación geográfica en la medida en que comparte territorio fronterizo con Venezuela. La región es un corredor estratégico para la exportación de cocaína y para otras economías ilegales, lo que la convierte en un territorio altamente codiciado por los grupos armados que buscan controlar no sólo los cultivos sino también las rutas transfronterizas.

El resultado de esta confluencia de factores es una crisis humanitaria crónica y agudizada. La Defensoría del Pueblo calificó la situación del Catatumbo en 2025 como “la emergencia humanitaria más grande desde que hay registro en Colombia a causa del conflicto armado”⁴⁴. La disputa por el control territorial y las rentas ilícitas es multifactorial y extremadamente violenta.

En el intermedio de las disputas armadas, la población civil cultivadora se ha visto atrapada. La violencia se manifiesta en desplazamientos masivos, confinamientos, la instalación de minas antipersonal, el uso de nuevas tecnologías de guerra como drones con explosivos, el reclutamiento forzado de jóvenes y ataques directos contra las comunidades indígenas y los líderes sociales⁴⁵. Las personas firmantes del Acuerdo de Paz son un blanco particular, sufriendo asesinatos,

⁴⁴ Defensoría del Pueblo, «El Catatumbo padece la emergencia humanitaria más grande desde que hay registro en Colombia, a causa del conflicto armado».

⁴⁵ Connectas, «Los intereses detrás de la guerra en el Catatumbo».

desapariciones y desplazamientos forzados que socavan cualquier esfuerzo de reconciliación⁴⁶.

En este contexto, la respuesta de las comunidades del Catatumbo ha sido una notable capacidad de asociación. Organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) se han consolidado como voces de la lucha campesina en la región⁴⁷. Su plataforma, que recoge muchas de las aspiraciones del campesinado, se centra en la defensa de la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y, fundamentalmente, la permanencia en el territorio. Estas, en conjunto con otras organizaciones, han promovido la consolidación de la Zona de Reserva Campesina, en búsqueda del fortalecimiento de la economía campesina, la protección del medio ambiente, y la limitación de la expansión de la frontera agrícola, como proyecto de vida alternativo al modelo extractivista y a las economías ilegales. Así mismo se articulan para denunciar sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos derivadas de las políticas antidrogas punitivas del Estado, que criminalizan al campesinado sin ofrecer soluciones estructurales⁴⁸.



Amazonía (Putumayo, Guaviare y Caquetá)

La Amazonía colombiana, particularmente los departamentos de Putumayo, Guaviare y Caquetá, representa la historia de la expansión de la frontera agrícola y del conflicto armado hacia las selvas del país. Es un territorio marcado por sucesivos ciclos de economías extractivistas, una colonización impulsada por la necesidad y la violencia, y el impacto devastador de una política de drogas que priorizó la represión sobre el desarrollo.

Históricamente, la región amazónica podría considerarse que fue un “espacio vacío” por el Estado, un territorio marginal cuya única función era la extracción de recursos naturales. Como evidencia de este abandono

⁴⁶ Defensoría del Pueblo, «El Catatumbo padece la emergencia humanitaria más grande desde que hay registro en Colombia, a causa del conflicto armado».

⁴⁷ ASCAMCAT, «Banderas de Lucha Campesina»; Carvajal Rodríguez et al., «La Coordinadora Nacional de cultivadores de coca, amapola y marihuana del Norte de Santander (COCCAM), una experiencia en la defensa y el desarrollo territorial».

⁴⁸ Carvajal Rodríguez et al., «La Coordinadora Nacional de cultivadores de coca, amapola y marihuana del Norte de Santander (COCCAM), una experiencia en la defensa y el desarrollo territorial».

institucional, tras padecer durante más de un siglo el despojo de ciclos extractivos, estas selvas recibieron en los años 60 y 70 a miles de familias campesinas que huían de la violencia del interior del país. Sin vías de comunicación ni asistencia estatal, comercializar productos agrícolas lícitos resultó ser una tarea imposible. Fue precisamente este aislamiento estructural el que consolidó a la coca en los años 80 como la única economía de subsistencia real: un producto con demanda asegurada que se compraba directamente en la finca, resolviendo el problema insalvable del transporte. Impulsados por esta necesidad estricta de supervivencia, los cultivos en el Putumayo experimentaron un crecimiento exponencial, pasando de 17.000 a casi 70.000 hectáreas entre 1996 y 1999, convirtiendo a la región en el epicentro cocalero del país.

Durante décadas, las FARC-EP ejercieron un control casi hegemónico sobre la vida social y la economía de la cocaína en gran parte de Putumayo y Guaviare. Actuaban como un Estado de facto, regulando la compra y venta de la pasta base, impartiendo justicia y cobrando impuestos⁴⁹. El Acuerdo de Paz de 2016 y la desmovilización de las FARC crearon un vacío de poder que el Estado colombiano no logró ocupar. En su lugar, el territorio fue rápidamente copado por una compleja reconfiguración de actores armados. Surgieron grupos disidentes como el Frente Carolina Ramírez y los “Comandos de la Frontera”.

Estos nuevos grupos han impuesto un régimen de control social aún más opresivo y pragmático que el de las FARC. Los Comandos de la Frontera, por ejemplo, ejercen una vigilancia total sobre la población: realizan retenes en los ríos para revisar los teléfonos celulares de los viajeros, imponen trabajos forzados para la construcción de infraestructura a su servicio, aplican sanciones económicas a quienes no acatan sus órdenes y regulan estrictamente con quién pueden comerciar las personas cultivadoras⁵⁰.

Adicional a las amenazas a la seguridad de las personas se erigen impactos diferenciados sobre el ambiente, pues en la Amazonía la economía de la cocaína está ligada a la deforestación, aunque no sea su principal determinante. A menudo, estas tierras, una vez agotadas, son convertidas en pastizales para la ganadería extensiva, en un proceso continuo de expansión de la frontera agrícola que destruye uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta⁵¹.

Esta dinámica fue acelerada por el Plan Colombia, cuando el Estado colombiano, con un masivo apoyo financiero y militar de Estados Unidos, emprendió la campaña de aspersión aérea con glifosato más intensa del mundo. Entre 2002 y 2014, se fumigaron más de 1.5 millones de hectáreas en el país, con la Amazonía como uno de los principales objetivos⁵². El impacto de esta estrategia fue devastador. Lejos de ser una herramienta de precisión, la aspersión aérea se convirtió en una forma de “violencia química” indiscriminada⁵³.

Ciclos extractivistas: Una historia acumulativa



FASE 1

S. XIX - Inicios S. XX
Quina y caucho

FASE 2

Mediados S. XX
Pieles y petróleo

FASE 3⁵⁷

60s - 70s
Colonización
campesina

FASE 4

80s - 90s
La bonanza cocalera



Elaborado por Elementa DDHH con base en *Transiciones Entre Economías (i)Lícitas y Regulaciones Armadas En El posacuerdo, Cultivos de coca, conflicto y deslegitimación del Estado en el Putumayo, y Coca, política y Estado en el caso de Putumayo 1978-2006*.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Turkewitz y Rios, «En lo profundo de Colombia, una nueva generación de combatientes se enfrenta por lo mismo».

⁵¹ Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, «Cultivos ilícitos y deforestación en la Amazonía colombiana».

⁵² International Crisis Group, «Raíces Profundas».

⁵³ Esteban Linares Sanabria y Elementa DDHH, «La erradicación de cultivos: otra de las lógicas de la guerra en la naturaleza».

Testimonios de campesinos y reportes de organizaciones de derechos humanos documentan cómo el glifosato no solo destruyó las plantaciones de coca, sino que arrasó con los cultivos de pancoger, envenenó las fuentes de agua, mató animales domésticos y silvestres, y causó graves problemas de salud en la población, incluyendo enfermedades dermatológicas, problemas respiratorios, abortos y posibles malformaciones congénitas⁵⁴.

Las comunidades campesinas de la Amazonía también han demostrado una importante capacidad de movilización, han sido quienes hacen frente a la estigmatización y, sobre todo, a las agresivas políticas de erradicación forzada. Las masivas marchas cocaleras que paralizaron Guaviare, Putumayo y Caquetá en 1996 son un hito en la historia de los movimientos sociales en Colombia. **Decenas de miles de campesinos salieron a las carreteras no para defender el narcotráfico, sino para protestar contra las fumigaciones aéreas que destruían sus cultivos de alimentos y para exigir al Estado inversión social, vías, salud y educación como una alternativa real a la economía de la coca.**



Nariño

El departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia, representa una encrucijada de factores como la pobreza, diversidad y geografía que crean uno de los escenarios más complejos y violentos para las personas cultivadoras en el marco del conflicto armado y las economías ilícitas del país. Si bien la expansión de los cultivos de coca en Nariño es un fenómeno más reciente que en otras regiones del país, y que se intensificó a partir de mediados de la década de 1990, la hoja de coca, y su transformación para exportar de manera ilegal es hoy el motor y centro de disputa en uno de los corredores de exportación de cocaína más importantes del mundo.

La planta de la coca ocupó zonas de colonización campesina, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, áreas históricamente caracterizadas por el aislamiento geográfico, la pobreza

⁵⁴ Gutiérrez, «Cultivos de coca en Colombia impactos socio-ambientales y política de erradicación».

estructural y la desatención estatal⁵⁵. A diferencia de la colonización en otras fronteras, en Nariño la coca no era una planta ajena; su uso tradicional ya estaba presente en algunas comunidades, pero fue la economía del narcotráfico la que la convirtió en un monocultivo a gran escala, alterando las prácticas culturales y productivas existentes.

La geografía de Nariño fue determinante. Su extensa y selvática costa Pacífica, junto con su frontera con Ecuador, lo convirtieron en el trampolín ideal para la exportación de cocaína hacia los mercados de Centroamérica y Norteamérica⁵⁶. Esta condición de corredor estratégico atrajo con una fuerza inusitada a todos los actores del conflicto armado, que vieron en el control del territorio nariñense la clave para dominar una de las principales fuentes de financiación de la guerra⁵⁷.

Nariño ostenta el título de ser el departamento con la mayor superficie cultivada de coca en Colombia. Según datos de 2023, junto con Norte de Santander y Putumayo, concentra el 65% de toda la coca del país. El municipio de Tumaco, conocido como la “Perla del Pacífico”, es el epicentro nacional de los cultivos, con casi 23,000 hectáreas sembradas⁵⁸. **Sin embargo, esta inmensa economía ilícita no flota en el vacío; se asienta sobre una precariedad estructural y una ausencia de derechos de propiedad que, como se ilustra a continuación, hacen inviable cualquier economía lícita.**

⁵⁵ Díaz y Sánchez, «Geografía de los cultivos ilícitos y Conflicto armado en Colombia».

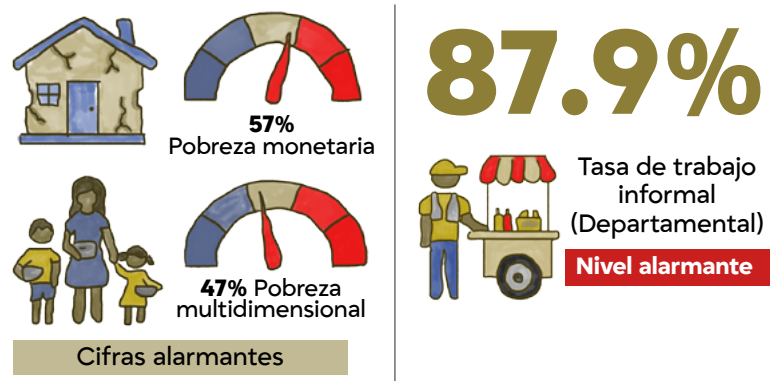
⁵⁶ Silva Ávalos, «Nariño, Colombia, kilómetro cero del tráfico de cocaína».

⁵⁷ Lasso Urbano y Cabello-Tijerina, «Dialéctica del conflicto armado en el departamento de Nariño, Colombia en tiempos de paz, lecciones para la construcción de una Paz Histórica».

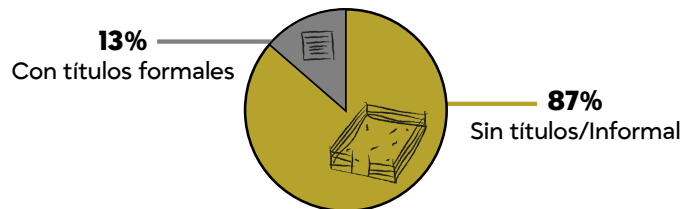
⁵⁸ González Perafán, «La Hoja de Coca y la Política Antidrogas en Colombia. Caso Cauca y Nariño»; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), «Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023».

Nariño: Precarización estructural y violencia fragmentada

El contexto socioeconómico (la precariedad) – Indicadores críticos y ausencia estatal (zonas cocaleras)



Informalidad en la tenencia de tierras



Ausencia total de infraestructura y apoyo estatal para hacer viables las economías lícitas.

Elaborado por Elementa DDHH con base en *¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?*

Tal como se observa en el panorama de seguridad, la desmovilización de las FARC-EP dejó un vacío de poder que no fue llenado por la institucionalidad estatal, sino disputado a sangre y fuego por múltiples actores. La irrupción simultánea del ELN, las disidencias (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia) y una miríada de bandas locales que actúan como subcontratistas, ha derivado en una fragmentación del poder armado sin precedentes.

Panorama de seguridad: Vacío de poder y guerra abierta

El panorama de seguridad (La fragmentación)

Desmovilización FARC-EP → Vacío de poder no llenado por el Estado.



*Actúan como subcontratistas en la cadena del narcotráfico

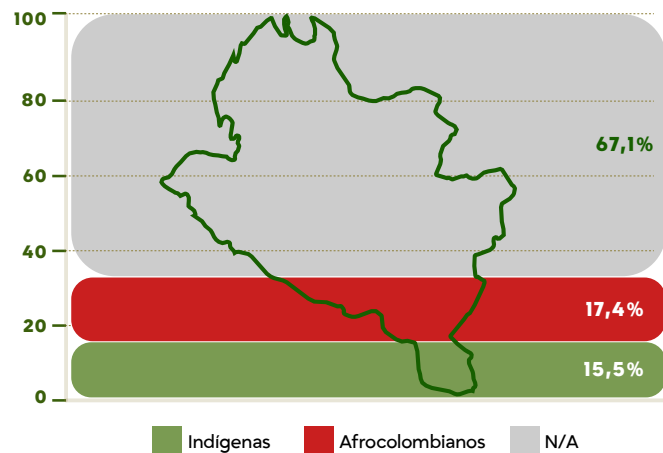
Panorama volátil y fragmentado por el control territorial.

Elaborado por Elementa DDHH con base en *Dialéctica del conflicto armado en el departamento de Nariño, Colombia en tiempos de paz, lecciones para la construcción de una Paz Histórica.*

Esta atomización ha creado un “mercado de la violencia” altamente competitivo. Al no existir un actor hegemónico capaz de imponer un orden unificado, la violencia se convierte en el principal mecanismo para regular el mercado, controlar las rutas y someter a la población. El resultado es una crisis humanitaria permanente, marcada por desplazamientos forzados masivos, confinamientos de comunidades enteras, masacres, desapariciones forzadas y un intenso reclutamiento de menores, que afecta de manera particularmente severa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, atrapadas en el fuego cruzado⁵⁹.

⁵⁹ Global Protection Cluster, «Análisis de Protección».

Población civil de Nariño



Población o grupos con auto identificación o pertenencia a comunidades étnicas.

Elaborada por Elementa DDHH con base en *Una mirada actual al contexto migratorio y sus determinantes sociales - Nariño*.

Este mapa poblacional resalta dos casos puntuales. El caso del Pueblo Awá, quienes fueron declarados por la Corte Constitucional en riesgo de exterminio físico y cultural, los Awá han visto sus territorios invadidos por la siembra de coca, sus comunidades confinadas por los enfrentamientos, sus líderes asesinados y sus jóvenes reclutados forzosamente⁶⁰. De manera similar, las comunidades negras de la costa Pacífica, en municipios como Tumaco, Barbacoas y El Charco, han visto sus territorios colectivos convertidos en campos de batalla. La violencia ha desarticulado sus formas de vida tradicionales, basadas en la pesca, la agricultura y la relación con el río y el manglar. Los desplazamientos masivos han vaciado veredas enteras, rompiendo el tejido social y cultural⁶¹. Mientras que su lucha se ha centrado en la defensa de su autonomía y territorio, las acciones punitivas y las narrativas tóxicas asociadas a la economía ilícita y la violencia son una amenaza directa a su supervivencia.

⁶⁰ Prada Céspedes y Teyete, «El pueblo Awá resiste a amenazas como el petróleo y los cultivos de coca».

⁶¹ Global Protection Cluster, «Análisis de Protección».



Cauca

El departamento del Cauca es un territorio de una inmensa diversidad geográfica, cultural y social, pero también un laboratorio donde todas las formas de conflictos sociales y todas las variantes de las economías ilícitas han convergido y se han adaptado. En el Cauca los conflictos son un cúmulo de disputas superpuestas donde la lucha histórica por la tierra se entrelaza con el control de la coca, la marihuana y la amapola.

El conflicto en el Cauca tiene sus raíces en los tiempos coloniales. La historia del departamento es la historia de la lucha de los pueblos indígenas, especialmente el pueblo Nasa, y de las comunidades afrodescendientes contra el despojo sistemático de sus tierras por parte de una élite terrateniente⁶². Esta lucha por el territorio ha sido el motor principal del conflicto social y armado durante siglos.

La llegada de los cultivos de uso ilícito en las últimas décadas del siglo XX no creó la guerra en el Cauca, sino que se insertó en ella, proporcionando un nuevo y poderoso combustible para los actores armados y reconfigurando las disputas territoriales. La geografía del departamento permitió la consolidación de tres enclaves productivos distintos: la amapola para la producción de heroína se estableció en las altas montañas del Macizo Colombiano a principios de los 90, su auge coincidiendo con crisis productivas que liberaron mano de obra campesina; la marihuana encontró un enclave histórico en los municipios del norte del departamento; y la coca se extendió por la costa Pacífica y el sur, en la estratégica región de la Bota Caucana y el Cañón del Micay⁶³.

El Cauca es un epicentro de una de las disputas armadas más intensas de Colombia, y que ubica en el centro de las confrontaciones a una población civil que busca subsistencia con los medios que tiene a su disposición. En el territorio hacen presencia las disidencias del Estado Mayor Central, con varios frentes del autodenominado Bloque Occidental Jacobo Arenas, quienes se han especializado en el control de los diferentes enclaves productivos. Estos grupos no solo se enfrentan a la fuerza pública, sino también al ELN y, en ocasiones, entre sí por el control de corredores y rentas⁶⁴. El frente Carlos Patiño ejerce un control férreo sobre la población

⁶² Sánchez Gómez, «Relato de la guerra en el Cauca».

⁶³ Ministerio de Justicia y del Derecho y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), «Caracterización agropecuaria del cultivo de amapola y de los territorios afectados».

⁶⁴ Matta Colorado, «¿Por qué las disidencias de las Farc de Cauca y Valle tienen tanto poder criminal?»

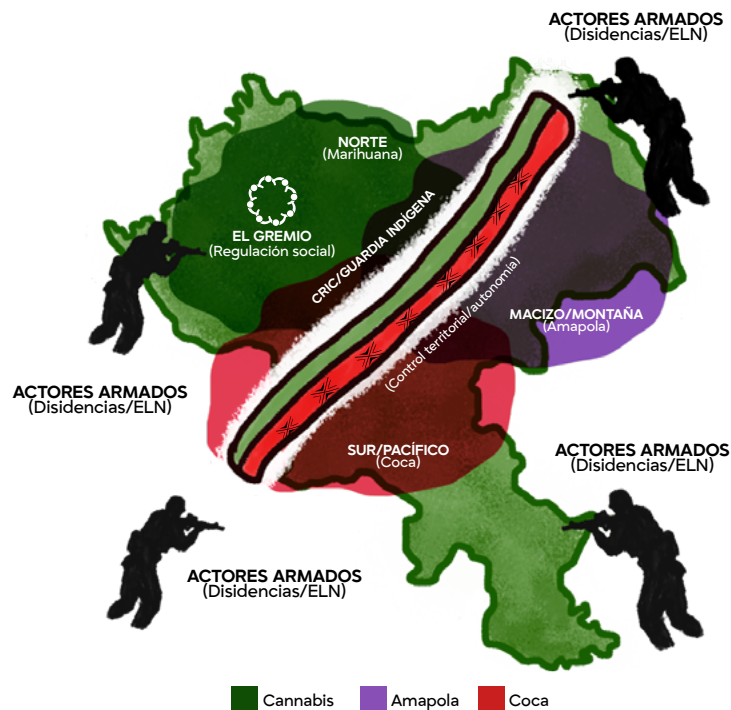
y la economía cocalera, lo que ha generado una grave crisis humanitaria, especialmente en el municipio de Argelia, con desplazamientos masivos, confinamientos y la utilización de la población civil como escudo⁶⁵.

excepcionalmente robusta en el Cauca. Este territorio vio nacer a uno de los movimientos indígena más robustos del país, articulado en torno al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). A través de sus asambleas comunitarias, su sistema de gobierno propio y su Guardia Indígena, el CRIC ha ejercido una defensa histórica del territorio, oponiéndose a la presencia de todos los actores armados —legales e ilegales— y a la expansión de las economías ilícitas⁶⁷. **Esta postura de resistencia y autonomía los ha convertido en un objetivo militar constante para quienes buscan controlar sus territorios⁶⁸.** Esto agudiza los choques y explica en alguna medida la intensidad de la violencia y por qué los líderes indígenas son un objetivo militar prioritario.

Por otro lado, la complejidad de las dinámicas sociales va más allá del enfrentamiento entre comunidades y grupos armados. En el norte del Cauca, la consolidada economía de la marihuana ha dado origen a una forma de organización social particular conocida como “El Gremio”. Este no es un grupo armado, sino una estructura social que agrupa a cultivadores, recolectores y otros trabajadores de la cadena productiva. “El Gremio” funciona como un regulador de facto de la economía, estableciendo precios, mediando en disputas y negociando con los demás actores presentes en el territorio, incluyendo a las autoridades indígenas y a los grupos armados⁶⁹.

La coexistencia entre la autoridad indígena y la economía de la marihuana es profundamente tensa. Se han registrado enfrentamientos directos entre la Guardia Indígena, que en cumplimiento de sus mandatos de control territorial intenta erradicar manualmente los cultivos, y miembros de “El Gremio”, que defienden lo que consideran su única fuente de sustento económico⁷⁰. Este es un claro ejemplo de un choque de legitimidades y visiones sobre el territorio.

Cauca: tierra en disputa



Elaborado por Elementa DDHH.

La violencia en el Cauca se manifiesta de múltiples formas: masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales —con una afectación desproporcionada sobre las autoridades indígenas—, y el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes por parte de los grupos armados⁶⁶. Sin embargo, la respuesta social a esta historia de violencia y despojo ha sido

⁶⁵ Acaps ORG, «Colombia - Aumento de la violencia armada en Argelia, Cauca».

⁶⁶ Misión de Observación Electoral, *Informe de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales*; Majjub Avendaño, «Reconfiguración del conflicto armado en el norte del Cauca, sus consecuencias en la regulación de la economía de la marihuana y mecanismos de resistencia y paz del movimiento social».

⁶⁷ Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, «Entonces, ¡hablamos!»

⁶⁸ Majjub Avendaño, «Reconfiguración del conflicto armado en el norte del Cauca, sus consecuencias en la regulación de la economía de la marihuana y mecanismos de resistencia y paz del movimiento social».

⁶⁹ Espitia Cueca y Majjub Avendaño, «La economía de la marihuana en el enclave productivo del Norte del Cauca».

⁷⁰ Fuquen, «Seis heridos por enfrentamientos entre Indígenas y cultivadores de marihuana en el Cauca».

04

LA CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA



Las narrativas que consumimos no son inofensivas. En el marco del sistema de prohibición o la llamada “guerra contra las drogas”, el lenguaje desplegado por los medios de comunicación ha sido una herramienta tan poderosa como las armas. No se han limitado a describir la realidad; activamente la han construido, interpretado y moldeado. Han sido un campo de batalla en sí mismo, justificando la violencia y perpetuando la estigmatización de las personas cultivadoras y sus territorios.

Este capítulo se sumerge en el corazón de esas narrativas. A través de un mapeo de noticias se exponen los marcos interpretativos, las metáforas, los silencios y las estrategias de polarización que han dominado y disputado la conversación pública. El análisis de estos discursos revela un conjunto de patrones narrativos recurrentes y consistentes a lo largo del tiempo, pero también expone sus contradicciones. Si bien una parte mayoritaria de estos patrones ha sido fundamental para legitimar el sistema prohibicionista y justificar las acciones punitivas, el lenguaje también ha servido para construir otros caminos.

Los hallazgos exponen cómo el discurso dominante ha buscado despojar de humanidad y dignidad a estas poblaciones, silenciar sus realidades y presentar las políticas de castigo como la única solución viable. Sin embargo, el mapeo también identifica narrativas de transición y contra-narrativas que desafían este encuadre, reconociendo a las personas cultivadoras como interlocutores políticos y enmarcando el problema desde el abandono estatal y la justicia social.

A continuación, se expondrán los hallazgos centrales agrupados según las categorías analíticas, mostrando tanto los patrones tóxicos como las “luces” o caminos alternativos encontrados.

Fabricando al "culpable"

El hallazgo más consistente en el análisis documental es el predominio del marco narrativo de la criminalización y la seguridad. La producción de coca, cannabis o amapola rara vez se presenta como un problema social complejo, una estrategia de subsistencia o una consecuencia directa del abandono estatal. En su lugar, es encuadrada de manera persistente como un asunto de orden público, un peligro social y una amenaza a la seguridad nacional. Dentro de este marco, las personas cultivadoras son posicionadas como un "otro" peligroso o, como se ve en el artículo sobre la "Narcoquerrilla", como un simple "sicario" de una entidad criminal unificada. Un marco secundario, pero relacionado, es el de la "amenaza ambiental", donde se describe a los cultivos y a las personas cultivadoras como la causa de la destrucción de los bosques, justificando la intervención estatal sin considerar las causas estructurales.

Aunque este marco es dominante, el mapeo también encontró contrapuntos atípicos a lo largo de toda la temporalidad analizada. Artículos como "Congreso abrió la puerta a debate..." y "El problema cocalero no es tan solo guerrillero", ambos de 1996, no solo identifican esta narrativa oficial, sino que la desafían activamente. Presentan voces que contrastan la fusión "cultivador-guerrillero" con las realidades sociales, culturales y de abandono estatal, refutando el marco militarista desde el hambre y la falta de infraestructura.

A continuación, se exponen algunos hallazgos del mapeo que ilustran cómo operan estos marcos narrativos dominantes y, a su vez, cómo emergen estos contrarrelatos:

01 de diciembre de 1991

COLUMNA DE UN ESPECTADOR

Alfonso Cano Isaza

España, drogadicción y legalización

Enhorabuena los editores de *Cambio16* han lanzado una edición para la América Latina. He leído las primeras entregas, y, desde luego, el tema central de las mismas ha sido el de la droga.

En la edición 1.044, del 25 de noviembre, el editorial, firmado por Juan Tomás de Salas, se refiere a la legalización de las drogas, bajo el título de *La manía de prohibir*. Dice en ese editorial que "sobre Occidente ha caído en los últimos años una maldición: la droga, que está torturando y asesinando a la juventud marginada de las ciudades con inaudita crueldad. Y en España esta maldición se nos ha venido encima tan de prisa, que aún estamos boquiabiertos por la escasa distancia que media entre el paraíso sin Franco y el infierno con mono (*) y con sida y con muerte. De las carreras ante los caballos de la dictadura, los jóvenes españoles han pasado en media generación a correr despavoridos ante los caballos mortales de la heroína envenenada y la jeringuilla con virus VIH del sida. Un horror".

Más adelante, el editorialista, después de dar a conocer los resultados de una encuesta sobre el problema de la droga en España, afirma: "Lo más doloroso de esta peste de fin de siglo es la incapacidad de la sociedad para hacerle frente. Oscilando entre la permisividad y la represión, la sociedad española no ha sabido en ningún momento qué hacer ante la droga. Buenas intenciones a montones empujaron el infierno español de la narcoadicción, hasta conformar un universo que se diría diseñado por un fabricante de drogas para su mayor beneficio: el consumo está permitido -con lo que se amplía el mercado-, mientras el comercio está prohibido -con lo que se aumenta el precio-. Esto parece el paraíso de Pablo Escobar, o los Ochoa o cualquier otro capo del narcotráfico".

Legalizar o no legalizar, ese es el dilema. Por ello, concluye: "La

gran duda -es mala la droga y por eso está prohibida, o es mala la droga por estar prohibida- parece cada vez más inclinarse por la segunda afirmación: la plaga de la droga, como problema social que mata y corrompe nuestras ciudades, es resultado de la prohibición".

Aunque tengo muy serias dudas sobre la efectividad de la legalización, porque pienso que, ante su menor costo en el mercado libre, el consumo, con todas sus letales consecuencias en la salud de los adictos, aumentaría geométricamente, comprendo también que, como bien lo anota Juan Tomás de Salas, con la legalización "desaparecerían por ensalmo los robos callejeros, los muertos infectados o adulterados, las autoridades corrompidas, los promotores piramidales y la inmensa fortuna del dinero negro".

La revista revela, en ese mismo número, unos aterradores testimonios de personas adictas a la heroína. Son testimonios sobre cogedores de cinco jóvenes que cuentan su dramática relación con la heroína. Son, a la vez, testimonios aportados con absoluta libertad a los reporteros de *Cambio16*, y constituyen un documento excepcional sobre uno de los problemas actuales que más preocupan a los europeos: la droga. Recomiendo su lectura, especialmente a los jóvenes, pues muestran el estado de abyección a que se llega al caer en ese vicio.

Por ello, todas las personas que intervienen en la elaboración y distribución de drogas adictivas -cultivadores de coca y amapola, proveedores de sustancias químicas, lavadores de dólares, expertos químicos, transportadores, expendedores, etc.-, son los peores criminales que existen en la actualidad. Y cualquier condena es poca para castigar su crimen de lesa humanidad.

Y, ¡alerta roja! en Colombia: amapola, sinónimo de heroína. ¡Remember marijuana y coca!

(*) En el lenguaje del drogadicto: ansiedad causada por la abstinencia.

Esta narrativa pone al mismo nivel penal y moral al campesino que siembra y el narcotraficante.

Al condenar el narcotráfico agrupa a todos los actores de la cadena bajo una misma etiqueta criminal, sin distinción social o económica.

30 de mayo del 2005

NARIÑO, PUERTO DE COCA EN EL PACÍFICO

El perfeccionamiento de las técnicas y las comunicaciones de la Armada Nacional, han permitido que en el último año la Costa Pacífica se haya convertido en el punto de mayor incautación de coca en el país. El incremento de los cultivos en Nariño y de los laboratorios para procesamiento convirtieron esta franja de 83.170 kilómetros cuadrados en un centro de producción y acopio de droga sin precedentes. (VER INFOGRAFIA Y ENCUESTA)

El perfeccionamiento de las técnicas y las comunicaciones de la Armada Nacional, han permitido que en el último año la Costa Pacífica se haya convertido en el punto de mayor incautación de coca en el país. El incremento de los cultivos en Nariño y de los laboratorios para procesamiento convirtieron esta franja de 83.170 kilómetros cuadrados en un centro de producción y acopio de droga sin precedentes.

Pero más allá de las hectáreas, otra gran preocupación para las autoridades es la cantidad de laboratorios (algunos muy sofisticados) que se encuentran enclavados entre los ríos Nulpe, Guiza y Mira. Allí, las Farc y las autodefensas se reparten el dominio y el control fluvial. Los caños sirven de albergue para los laboratorios según lo relatan los militares que salieron de la zona hace 15 días.

El mercado

"En este momento el dominio de los cultivos y la producción está repartido entre el frente 29 y las columnas Daniel Alcázar y Mariscal de Sucre de las Farc, el bloque Libertadores del Sur de las autodefensas y el cartel del Norte del Valle, que tiene arrendadas varias hectáreas, según los militares.

Un punto que estaba en disputa era cabo Manglaré, donde desemboca el río Mira, que a la vez recibe las aguas (y la coca) de los ríos Nulpe y Guiza.

Según los informes de inteligencia del Ejército y de la Armada, la gran mayoría de hectáreas están arrendadas por la guerrilla algunas de ellas al cartel del norte del Valle, mientras que los paramilitares cobran impuesto de movilización.

La coca que sale de los laboratorios es vendida en los propios chongos (cristalizadores) y de ahí sacada por los esteros hasta la costa. El precio se mantiene en dos millones y medio el kilo en Colombia y 25 mil dólares en el mercado internacional.

"La alianza entre el bloque 'Libertadores del Sur' de las autodefensas y el frente 29 de las Farc para nosotros es evidente. Se ratificó con la incautación de 15 toneladas de coca el pasado 12 de mayo. Hubo un trabajo coordinado de los dos grupos y los narcotraficantes para lograr sacarla", señaló uno de los hombres de la Armada que lideró la operación.

Por ahora, las autoridades esperan otras semanas para saber los efectos de la fumigación.

Precisamente después de la incautación de 15 toneladas de coca hace dos semanas en el Pacífico, la Armada Nacional incrementó los controles marítimos para interceptar las lanchas go fast que son empleadas por los enlaces de los narcotraficantes para llevar la droga hasta altamar.

Las autoridades planean hacer una segunda fase de esta operación para cortar las rutas que actualmente utilizan los grupos paramilitares y la guerrilla de las Farc para sacar el alcaloide del país.

Para algunos de los oficiales del Ejército y la Armada que están asignados a la zona trabajando el tema del narcotráfico, el Pacífico, específicamente la costa de Nariño, se convirtió en la Tranquilandia de las Farc y los paramilitares.

Tan solo en lo corrido del año la Fuerza Naval del Pacífico ha incautado 36 toneladas de cocaína. En el 2004 en esa región fueron detectadas en total, 46 toneladas.

Es por eso que las operaciones contra el narcotráfico serán reforzadas. El Ministerio de Defensa ya aprobó la creación de una base antinarcóticos en Tumaco, desde donde se coordinarán las operaciones actualmente en la base de la Armada, pero que ahora contará con los recursos que se requieren para este trabajo.

Según el almirante Guillermo Barrera, jefe de operaciones navales de la Armada, la capacidad de los equipos de inteligencia y los convenios con Panamá, Ecuador, Estados Unidos y otros países han permitido incrementar la incautación de droga, pero la zona es muy compleja.

Decenas de esteros y pequeños estrechos fluviales que desembocan en el Pacífico, sirven de ruta para la salida de la coca. Las personas que viven del negocio se las han ingeniado para construir las embarcaciones que llevan hasta alta mar la droga, donde se recogen los barqueros y buques que se encargan de dejarla en puertos internacionales.

Las cifras

Aunque el almirante Barrera señala que no tiene cifras exactas de las hectáreas de coca que actualmente hay sembradas en Nariño, lo cierto es que la fumigación del Plan Colombia que terminó hace un mes, habría dejado menos de 5 mil hectáreas.

Sin embargo, oficiales de la Brigada contra el Narcotráfico, encargados de apoyar la tarea de fumigación, señalan que al terminar el año la cifra puede triplicarse, ya que los cultivadores utilizan el agua con azúcar y la aguadepanela para proteger del glifosato a las hojas de coca.

A finales del 2003, cuando las Fuerzas Militares lanzaron la primera gran operación contra el narcotráfico en Nariño, la información de satélite arrojó una cifra de 35.000 hectáreas sembradas con coca.

En el 2002 se habló de 15.000 hectáreas sembradas, en el 2001 de 9.300 y en el 2000 de 7.494. A principios de este año se habían detectado 17.000.

Las acciones estatales son exclusivamente militares ("operaciones contra el narcotráfico" "fumigación").

Las voces de autoridad son "oficiales del Ejército y la Armada".

El éxito de esta política punitiva no se mide en bienestar social, sino en métricas de interdicción ("punto de mayor incautación", 36 toneladas de cocaína). La solución al problema es más militarización.

05 de octubre del 2011

Nomina a los actores como "campesinos" que "protestan", no como "cocalleros" o "narcocultivadores".

Este artículo muestra una clara transición narrativa, alineada con el momento histórico en el que se dió un giro hacia la construcción del Acuerdo de Paz.

Gobierno y campesinos acuerdan levantar protesta en Tarazá

Entre lo pactado está la creación de un comité para recibir denuncias por posibles violación del Derechos Humanos.

Delegados del Gobierno colombiano y líderes campesinos firmaron este jueves un acuerdo por el cual se pone fin a una protesta que por once días concentró a más de 2.500 personas que protestaban por las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos en el municipio de Tarazá.

El vicepresidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, Andrés Henao, dijo que el acuerdo firmado en la Casa de la Justicia de esta población del departamento de Antioquia contempla puntos que tiene que ver con derechos humanos, desarrollo de proyectos agrícolas legales y acceso a tierras que estaban en manos de paramilitares.

"Fue una reunión en la que estuvieron representantes del Gobierno, de los campesinos, del Ejército, de la Policía y otras entidades", señaló Henao, al precisar que los campesinos comenzarán a regresar a sus lugares de origen el próximo sábado en transportes facilitados por el departamento y el Gobierno. "Aquí nos quedamos esta noche (jueves) y mañana (viernes) hay una reunión con los miembros del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER, estatal) para precisar detalles de tierras y cultivos, pero de resto, todo claro", agregó Henao.

Play Video

Les otorga legitimidad como sujetos políticos con demandas sociales ("piden proyectos productivos").

Entre lo pactado está la creación de un comité para recibir denuncias por posibles violación del Derechos Humanos, revisión de los procesos de recaudo para indemnizar cultivos lícitos afectados por las fumigaciones contra siembras de coca y proyectos para inversión social.

Detalló que las poblaciones de Tarazá y su vecina Valdivia tendrán electricidad y en ellos también se desarrollarán proyectos con productos como cacho, cacao y ají. Igualmente, una finca de unas 9.000 hectáreas, que estaba en poder de paramilitares, pasará a repartirse entre campesinos de la zona.

Apuntó que en los once días de paro hubo 15 heridos entre los campesinos, de los cuales cinco fueron detenidos "pero ya liberados", y destacó que en el momento hay un desaparecido, un campesino de 52 años del que no se tienen noticias desde el martes pasado y que vive en Tarazá.

Por su lado, las autoridades reportaron, hasta el miércoles pasado, la quema de tres camiones. El Ejército colombiano aseguró en su momento que los campesinos de la zona han sido presionados por las Farc para que realizaran la protesta, toda vez que los guerrilleros defienden los cultivos ilícitos de matas de coca.

El marco narrativo dominante aquí no es el de la seguridad, sino el del diálogo y la protesta social, reconociendo a los cultivadores como interlocutores.

09 de agosto de 2013

Este artículo ilustra el marco narrativo donde el éxito de la política de drogas se mide exclusivamente por la reducción de hectáreas, un punto que crítica este documento.

Hay un silenciamiento total sobre la dimensión humana de esa reducción: no se pregunta qué pasó con las familias que dejaron de cultivar esas 16.000 hectáreas, si transitaron a economías lícitas o si se agudizó su pobreza. La persona cultivadora es invisible; solo existe la hectárea.

Cultivo de coca en Colombia registra su nivel más bajo, con 48.000 hectáreas

La meta del Gobierno para 2013, según reveló el ministro Pinzón, es reducir el territorio sembrado de coca a 30.000 hectáreas.



La persona cultivadora es invisible; solo existe la hectárea.

El cultivo de coca en Colombia registró en 2012 su nivel más bajo con un área de 48.000 hectáreas, lo que supone una reducción del 25 % con respecto a las 64.000 sembradas en 2011, mientras que la producción potencial de cocaína bajó en un 10 % hasta las 309 toneladas, según un informe publicado.

Estas son las cifras del "Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca de 2012", que fue elaborado con imágenes satelitales, sobrevuelos y trabajo de campo y cuyas conclusiones divulgaron en Bogotá la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno colombiano.

El representante de esa oficina en Colombia, Bo Mathiasen, calificó los resultados como "alentadores" y ratificó que "la tendencia a la reducción del área cultivada que se inició en 2007 se mantiene en 2012".

Por su parte, el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, subrayó que "esta es "la reducción (de área sembrada) más grande desde 2001", cuando comenzó el programa de monitoreo en el país, y también se refirió a los datos "más bajos de producción potencial de cocaína desde que se tiene registro".

Aunque el Ministro de Defensa (el actor jerárquico) menciona la "inversión social", el foco de la noticia y la métrica de éxito es el dato de hectáreas.

Mathiasen atribuyó estos resultados a las políticas del Gobierno en 2012, que erradicó manualmente 30.436 hectáreas de coca, destruyó con aspersión aérea otras 104.307 hectáreas, eliminó unos 2.480 laboratorios de procesamiento y se incautó de 188 toneladas de cocaína.

No obstante, el funcionario de la ONU destacó la capacidad de los productores para volver a sembrar coca en los territorios erradicados, por lo que enfatizó que "el gran desafío es la sostenibilidad" de las cifras.

El informe subrayó también que "los cultivos de coca detectados en el censo de 2012 ocuparon el 0,04 % del total de tierra cultivable en Colombia" y que 23 de los 32 departamentos del país están afectados por las siembras.

En el mapa, al menos 17 regiones redujeron sus niveles de cultivo, mientras que en Norte de Santander (noreste), Caquetá (sur) y Chocó (noroeste) crecieron.

En Cundinamarca (centro, del que Bogotá es capital) desapareció la coca y Cesar (noreste) ingresó en la lista de afectados, detalló el informe.

Pese a la disminución en Nariño y Putumayo (suroeste, fronterizos con Ecuador), estos departamentos siguen siendo los que más tienen cultivos ilícitos, con 10.733 y 6.148 hectáreas, respectivamente.

Mathiasen alertó de que los cultivos en resguardos indígenas y en consejos comunitarios sufrieron una contracción frente al repunte en parques naturales.

De acuerdo con el informe, "cerca del 40 % de la coca del país se encuentra en alguno de estos, antes territoriales".

Por otro lado, la producción total de cocaína con un 100 % de pureza se redujo en menor proporción que la zona sembrada, al disminuir en un 10 %, lo que se traduce en un estimado de 309 toneladas.

El informe indicó además que existe una tendencia hacia la reducción en los rendimientos anuales y una reactivación del mercado de hoja de coca.

En 2012 se registró un aumento del 9,9 % en el precio de la coca fresca, en contraste con la estabilidad en los valores de la pasta básica (-0,4 %), base de cocaína (3,9%) y clorhidrato de cocaína (-2,4 %).

Otro fenómeno registrado el año pasado apunta a que los productores tienen cada vez menos dependencia de estos ilícitos, al tiempo que han ido abandonando la actividad del procesamiento, que dejan en manos de otros actores, para dedicarse a la minería ilegal.

"Los sobrevuelos han permitido comprobar que la relación entre el cultivo de coca y la minería ilegal" es una realidad cada vez más frecuente, indicó Mathiasen.

14 de junio del 2022

Este reportaje es un ejemplo de contra-narrativa.

Su objetivo explícito es dar jerarquía a "las voces de las personas cultivadoras", posicionándoles como los actores centrales y fuentes legítimas de información.

Ruta de la marihuana en Jambaló: voces de cultivadores y quienes sustituyeron

En Jambaló, al norte del Cauca, le quieren quitar estigmas a los comuneros. Autoridades indígenas aseguran que son campesinos honestos, que se dedicaron al cultivo del cannabis por su ancestralidad y por no tener alternativas legales y rentables por parte del Estado para sustituir la planta. Así se mueve este sector en un municipio que también es resguardo indígena nasa.



GINNA MONTOYA
Autoridad del pueblo indígena Nasa



Contrapone la realidad de quienes aún cultivan con la de "quienes sustituyeron", exponiendo las complejidades del territorio y las fallas del Estado, en lugar de recurrir a una narrativa criminalizante.

Este artículo activa el marco narrativo de la criminalización y la seguridad desde la perspectiva de un actor internacional (EE.UU.).

EE.UU.: Cultivos de coca en Colombia alcanzan su mayor nivel histórico

Según el ONDCP, el aumento de la producción de cocaína en Colombia se "relaciona directamente" con un incremento en el consumo de esa droga en Estados Unidos.

Por: AFP - Colombia.com

Lun: 25 Jun 2018 12:07 pm



Los cultivos de coca en Colombia han aumentado en un 11%. Foto: AFP

El área de cultivos de coca en Colombia experimentó en 2017 un crecimiento de 11% para alcanzar las 209.000 hectáreas en su más elevado nivel histórico, afirmó este lunes la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP) estadounidense.

En ese mismo período, la capacidad de producción de cocaína en Colombia habría aumentado un 19%, afirmó la entidad, para pasar de un estimado de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 toneladas métricas en 2017.

En una nota oficial el subdirector de la ONDCP, Jim Carroll, apuntó que "el mensaje del presidente (Donald) Trump a Colombia es claro: el crecimiento récord en la producción de cocaína tiene que ser revertido".

En la visión del alto funcionario estadounidense, "el gobierno de Colombia debe hacer más para hacer frente a este incremento" en el área de cultivo de coca y la capacidad de producción de cocaína.

La trayectoria de crecimiento en áreas y capacidad "es inaceptable", dijo el funcionario.

"Colombia es un importante aliado de Estados Unidos y tiene un papel crítico", comentó.

Según el ONDCP, el aumento de la capacidad de producción de cocaína en Colombia se "relaciona directamente" con un incremento en el consumo de esa droga en Estados Unidos.

Esto se asocia a "un mayor número de casos de sobredosis y de violencia por el comercio de la droga".

La ONDCP apuntó que el número de nuevos usuarios de cocaína en Estados Unidos creció nada menos que 81% desde 2013 "y el número de muertes por sobredosis se duplicó en el mismo período".

Washington y Bogotá acordaron en marzo un plan para reducir el área de cultivos de cocaína a la mitad en un plazo de cinco años.

Este lunes, el ONDCP reconoció el compromiso colombiano de erradicar 70.000 hectáreas, pero apuntó que "esfuerzo máximo y resultados concretos se tornan necesarios para detener los cargamentos de cocaína" hacia Estados Unidos.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, mantuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, para felicitarlo por su victoria electoral y también para pedirle empeño en las acciones antidroga.

De acuerdo con la Casa Blanca, en esa llamada Pence le reforzó a Duque "la necesidad de moverse de forma decisiva para recortar la producción y el tráfico de drogas".

A pesar de un brutal enfrentamiento de años con grupos narcotraficantes, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, un aspecto crucial y doloroso de la relación de ese país con Estados Unidos.

La narrativa se centra en la planta (la coca) y las cifras ("209.000 hectáreas"), que se presentan como un problema de seguridad nacional y no como un fenómeno social.

¿Quién tiene la palabra?

El análisis de los tópicos (temas) y la jerarquía (quién habla y quién hace) revela un patrón repetitivo donde la agenda es definida por la seguridad y el orden público. Las voces de autoridad legítimas son casi exclusivamente funcionarios estatales (Ministros de Defensa, altos mandos militares, funcionarios de EE.UU.), quienes enmarcan el problema en términos de operaciones militares y lucha contrainsurgente. En esta jerarquía, las personas cultivadoras son el objeto pasivo de la noticia, receptores de un "ultimátum" o de la fumigación.

Una transición narrativa clave ocurre con la cobertura de las protestas. En estos casos, el tópico cambia a "protesta social" y la jerarquía de actores se invierte: los "campesinos" se convierten en protagonistas activos que "impiden", "exigen" y "negocian". Sin embargo, esta transición es a menudo disputada: otras narrativas, citando las mismas fuentes oficiales, encuadran la protesta como "disturbios" o infiltración de grupos armados, devolviendo el tópico a la seguridad. Finalmente, emerge una nueva narrativa atípica, la del "desarrollo", que si bien es positiva, silencia a los cultivadores tradicionales en favor de "empresarios".

En los párrafos siguientes se hará el repaso sobre las noticias en las que se encontró alguna evidencia sobre la categoría:

El tópico es la "amenaza" y el "desafío". Este enfoque produce un silenciamiento clave: los cultivadores como sujetos sociales desaparecen por completo.



Año 1998

FF.AA. buscan concretar planes antidrogas

Ministro de Defensa y altos mandos inician hoy visita oficial a Estados Unidos

Con el fin de adelantar sesiones de trabajo relacionadas con la lucha antidrogas y la situación de orden público en el país, se desplazaron hoy a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo; el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, y el director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano.

Lloreda y los altos mandos permanecerán en Estados Unidos por cinco días, durante los cuales sostendrán una serie de encuentros con funcionarios del Departamento de Estado, el secretario de Defensa de E.U., William Cohen, y el jefe del Comando Sur de ese país, general Charles E. Wilhelm.

Voces autorizadas de las Fuerzas Armadas indicaron a este diario, que en desarrollo de los encuentros se discutirán temas que atañen a las nuevas labores de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas y las operaciones para contrarrestar acciones terroristas como el tráfico de armas.

Adicionalmente, los altos mandos llevarán a cabo charlas con funcionarios del Pentágono, la Agencia Antidrogas DEA y el FBI, con el fin de evaluar los resultados durante el último año de las acciones contra el narcotráfico y concretar las ayudas tanto para la Policía como para las F.M. en dicha materia, dijo ayer el ministro Lloreda Caicedo. Para Lloreda lo importante es el compromiso de los E.U. y que se concreten las ayudas antinarcóticos.

Otras de las sesiones serán abordadas por el general Serrano Cadenas con la fiscal general Janet Reno.

Colombia, a estudio

El ministro Rodrigo Lloreda y los generales Tapias y Serrano asistirán a varias reuniones de corte



Rodrigo Lloreda Caicedo, ministro de Defensa.

académico en la Escuela Superior de Guerra de Estados Unidos. Entre los eventos programados está el seminario "El desafío de Colombia en el siglo XXI", que tendrá lugar en la ciudad de Carlisle, Pennsylvania.

A su vez, intervendrán como conferencistas e invitados especiales, la ex candidata a la Presidencia, Noemí Sanín; el ex ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, y el analista político, Eduardo Pirarro, quienes expondrán la situación de seguridad nacional, la amenaza del narcotráfico, las relaciones internacionales, entre otros puntos.

El certamen tiene como objetivo desarrollar un exhaustivo análisis de la realidad colombiana —especialmente lo que hace referencia a la situación de orden público—, frente a los demás países del hemisferio y de cara al próximo milenio.

El ministro Rodrigo Lloreda y los miembros del alto mando regresarán al país el próximo sábado cuando se espera que den a conocer el resultado oficial de su visita y las conclusiones de las reuniones de trabajo.

El enfoque se centra en la "lucha contra el tráfico de drogas" desde las Fuerzas Armadas, presentando el problema como un asunto de represión y no como un fenómeno social.

Palabras como lucha y orden público al momento de hablar de drogas orienta la discusión hacia la seguridad y cooperación militar.

Las fuerzas armadas como único actor interviniente en atender el asunto de la producción de coca.

"evaluar los resultados" en el contexto de la noticia es medir erradicación de coca.

09 de marzo de 2013

Cerca de 800 cultivadores de coca protestan por erradicación

La protesta de los cocaleros puede convertirse en una marcha a la que se unan otras regiones.

Un cordón humano conformado por cerca de 800 raspachines impiden a erradicadores empezar a arrancar las cerca de 6.000 hectáreas de coca que se calcula tiene sembradas en el Guaviare, que por años fue el primero en esos cultivos ilícitos en el país.

Los campesinos se apostaron hace unos días en Naranjales, zona rural a una hora de San José del Guaviare, la capital departamental, cuando supieron que los erradicadores enviados por el Gobierno nacional llegaban a arrancar la planta maldita que, para ellos, entre 3.000 y 4.000 familias es el único medio de subsistencia.

El gobernador Octaviano Rivera, que conoce bien el problema, pues vivió de la misma actividad durante casi 13 años, se siente en la encrucijada. Casi son sus hermanos, con los que se crió, a quienes hoy, como primera autoridad del departamento, debe controlar.

"Hoy como gobernador tengo un gran compromiso con ellos, pero uno se siente de brazos cruzados porque la necesidad es grande, la exigencia de los campesinos es grande y uno no puede dar respuestas. Nos hemos visto de alguna manera cohibidos porque si apoyo los campesinos con alimentación para que sostengan la marcha, puesta estaría apoyando algo que va contra una política de Estado y podríamos estar cayendo en algún acto que nos genere una investigación", dice el gobernador.

Según el mandatario, los campesinos no están defendiendo los cultivos ilícitos, sino el único sustento que tienen, y asegura que ellos no están contra la erradicación. Según dijo Rivera a Llano Sie 7edías, los cocaleros están dispuestos a erradicar siempre y cuando se les garantice un programa de sustitución de cultivos.

El programa se llama raíz por raíz y consiste en arrancar una mata de coca y sembrar una de cacao, plátano, caucho, árboles maderables, explica el mandatario, que este 7 de marzo espera tener la primera mesa con funcionarios de alto nivel del Gobierno central para buscar una solución a este problema social.

Rivera advierte que la protesta de los cocaleros del Guaviare puede derivar en una marcha de grandes proporciones a las que se unan raspachines de otras regiones y sostiene que los manifestantes han estado en diálogo con raspachines de otras regiones.

Lo que esperamos es que "el Gobierno nacional nos escuche y se haga una agenda de trabajo para ver si le encontramos salida a este tema que tanta guerra, tantá sangre le ha traído al país", dice el gobernador del Vichada.

A diferencia de las narrativas que silencian a los cultivadores, este artículo eleva la "protesta social" a tópico principal.

Narrativa tóxica.

Devuelve la voz a las personas.

No son objetos pasivos, sino sujetos políticos activos que negocian una "solución a este problema social".

En la jerarquía de actores, los "campesinos" ("cocaleros") son los protagonistas: "impidieron", "se apostaron", "exigencia de los campesinos", "están dispuestos a erradicar" (bajo condiciones).

08 de septiembre de 2021

El tópic es la "oportunidad" y la "reactivación económica".

Este comunicado oficial es un ejemplo claro del marco narrativo del desarrollo.

Colombia: El Valle del Cauca es el primer departamento con una cadena productiva de Cannabis Medicinal e Industrial

Por Redacción - septiembre 8, 2021 130 0

productores no criminales

Con la creación del Comité Departamental de la Cadena Productiva de Cannabis Medicinal e Industrial, el Valle del Cauca se convierte en el primer departamento en impulsar este sector en el país. Este cuerpo consultivo, que articula el trabajo de 200 productores, es un paso fundamental para esta cadena conformada por fuentes semilleras, cultivadores, plantas de transformación, comercializadores y entidades de apoyo.

"Ha sido un trabajo interinstitucional intenso con el apoyo del Ministerio de Agricultura que desde el año pasado nos apoya para formar esta cadena productiva. Más de 200 empresarios del sector y la comunidad han participado en este proyecto que hace parte de esta apuesta por la reactivación de la economía", dijo Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca.

Con estrategias que aumenten la productividad y consoliden a este sector avanza el proceso que busca impactar el desarrollo social de las comunidades. Cabe destacar que en el 95% de los cultivos hay mano de obra femenina, mujeres encargadas de recolectar las hojas.

"Una vez conformada la Cadena Productiva del Cannabis Medicinal e Industrial que queremos aclarar, es un órgano consultivo,

Los actores legitimados son los "empresarios" y "emprendedores".

las personas que hagan parte de este gremio, podrán recibir asesoría y estrategias que van a ayudar a expandir sus negocios, la productividad de los mismos", detalló Margarita Gutiérrez, asesora del Despacho de la Gobernación del Valle.

Para la consolidación de la Cadena Productiva del Cannabis Medicinal e Industrial desde el Gobierno departamental se han impulsado foros, mesas técnicas y un pacto de voluntades entre productores, transformadores, comercializadores y el Ministerio de Agricultura, acciones que hoy abren la puerta a la investigación, ciencia, tecnología y generación de empleo en el Valle del Cauca.

Michelle Chavaco
Periodista Gobernación del valle

(se entiende y explica el rol de las plantas ilegalizadas como una ruta para la creación de nuevas oportunidades de desarrollo económico).

Reconoce los roles y las poblaciones que trabajan en la cadena de abastecimiento.

Esta narrativa silencia por completo la historia de criminalización del cannabis y de sus cultivadores tradicionales, quienes están ausentes del relato.

11 de abril de 2022

Si bien la noticia nombra a los cultivadores como tal, este titular activa el marco de la criminalización al definir a los actores ("Cultivadores de hoja de coca y amapola") por su acción de "bloquean la vía".

Cultivadores de hoja de coca y amapola bloquean la vía Cúcuta-Tibú

El bloqueo se presenta en el sector Llano Grande del municipio de Tibú, ante el reinicio de las erradicaciones forzadas.



Cultivadores de hoja de coca y amapola bloquean la vía Cúcuta-Tibú - Olger Pérez

Un grupo de campesinos y cultivadores de hoja de coca y amapola en Norte de Santander, bloquearon la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de Tibú, ante el reinicio de las erradicaciones forzadas por el Ejército Nacional en la región.

Las erradicaciones forzadas se concentran en las veredas Nazaret y Guachimán, zona rural del municipio de Tibú, pese al diálogo y al preacuerdo que se había logrado con el Gobernador de Norte de Santander y los viceministros del Interior y Justicia para que no se generaran los operativos de las tropas.

"Ya hay bloqueos de vía en el sector de Llano Grande, eso pertenece al corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, no están permitiendo el paso de los vehículos de Ecopetrol y los Palmicultores". Señaló Pérez

Muy preocupados se encuentran los transportadores que cubren la ruta hacia la zona del Catatumbo, ante los bloqueos que están generando los cultivadores de hoja de coca y amapola. Los trabajadores de Ecopetrol, propietarios de volquetas y quienes laboral con la palma de aceite, paralizaron labores ante el posible uso de sus vehículos, para el bloqueo de las vías.

"Decidimos paralizar labores, ante cualquier situación que se pueda presentar, debemos cuidar la vida de los transportadores y los vehículos que cubren la ruta hacia Tibú, hemos informado a los compañeros que proyectaban ingresar al municipio, para que se abstengan hasta nueva orden". Señaló un transportador

Por el momento se encuentra bloqueada la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, hasta que no se logre un nuevo diálogo con las autoridades.

Los líderes de esta protesta siguen insistiendo que la erradicación forzada no es la solución a las más de 42 mil hectáreas de cultivos ilícitos que existen en Norte de Santander.

No es que no quieran erradicación porque sí, no quieren erradicación porque su subsistencia depende de los cultivos.

La preocupación final es por las actividades petroleras pero no se centra en las demandas de las personas o en las motivaciones de estas demandas.

Esta narrativa enmarca la protesta social como un problema de orden público y una alteración a la movilidad, antes que como una demanda política legítima (que el texto luego menciona: rechazo a la erradicación).

El poder de nombrar

Las formas de nominación son una estrategia discursiva central. El patrón más repetitivo y tóxico es el uso de palabras compuestas que fusionan la actividad agrícola con el crimen, como "narcocultivos", borrando la identidad campesina. Otra estrategia recurrente es nominar al actor por una acción negativa ("los cultivadores... que han tumbado los bosques") o por una presunta asociación criminal ("...de las Farc"), lo cual silencia al campesino y lo reemplaza por el actor armado.

Se observa una transición narrativa fundamental en los discursos asociados al Acuerdo de Paz y a la regulación del cannabis medicinal. En estos contextos, emergen nuevas formas de nominación como "familias campesinas" o "pequeños y medianos cultivadores". Estas nominaciones otorgan legitimidad, posicionando a los sujetos como "socios" del Estado o como actores económicos válidos. Finalmente, encontramos contra-narrativas atípicas, como "Los rostros de la coca", que buscan explícitamente humanizar y desafiar la nominación criminal.



07 de agosto de 1996

El artículo utiliza repetidamente el término "narcocultivos" para referirse a las plantaciones.

La solución que se discute, en consecuencia, no es la reforma agraria (mencionada en el título), sino el control de estos "narcocultivos" a través de un "censo" y "carnetización".

Reforma agraria y no represión para el Putumayo

La propuesta del presidente francés Jacques Chirac de comprar los narcocultivos a los campesinos del putumayo estimularía la creación de nuevos sembradíos, afirmó la representante Alegria Fonseca.

Así mismo la parlamentaria dijo que esta medida contribuiría a agravar la situación de deforestación en la zona y por ende afectaría de manera irreversible la selva andina como la del piedemonte.

"Considero que esta posibilidad agravaría la situación ambiental del país y se extendería a todos los departamentos que tienen narcocultivos, como es el caso de Guaviare, Caquetá y Putumayo", denunció Fonseca.

De otra parte, la representante ambientalista afirmó que apoyaba la tesis de la sociedad colombiana de Ecología sobre el peligro que representa el eventual hecho de que el Gobierno compre los narcocultivos a los campesinos, ya que se abriría de esta manera las puertas a un lucrativo negocio que provocaría la "expansión de los cultivos ilícitos, la colonización y de paso la deforestación".

Anotó a continuación que sería conveniente y oportuno para proteger la naturaleza, pensar en la posibilidad de establecer fincas relativamente autosuficientes, que les permitan a los campesinos obtener su alimento a partir de la diversidad biológica de la zona.

"Si el Gobierno compra la propuesta del gobierno francés de comprar los narcocultivos, urgente es hacer un censo, un sistema de planificación, un censo, una carnetización; determinar las áreas ecológicas afectadas... solamente a través de este procedimiento se podría conjurar graves problemas hacia el futuro, tanto a nivel social como ecológico, en los departamentos que padecen el fenómeno de los narcocultivos", sentenció Alegria Fonseca.

De otra parte, aseguró la parlamentaria que el Gobierno del presidente Samper se encuentra en deuda con los nuevos departamentos creados por la Carta Política de 1991.

Esta palabra fusiona lingüísticamente la actividad agrícola ("cultivos") con el crimen ("narco"), borrando la identidad del campesino y su contexto social.

19 de septiembre de 2014

El titular mismo es un claro ejemplo de la "fusión deliberada entre el cultivador, el narcotraficante y el guerrillero".

Esta expresión muestra el sesgo militarista y de política de seguridad del Estado frente a los cultivos de uso ilícito.

Destruyen dos cultivos de amapola y marihuana de las Farc

El hallazgo se registró en el norte del departamento del Cauca.

La nota nomina el cultivo no por quién lo trabaja, sino por quién (presuntamente) lo controla militar y económicamente, asociando automáticamente la planta con el actor armado.

En desarrollo de una operación militar en zona rural del departamento del Cauca, tropas de la **Fuerza de Tarea Apolo** reportaron el hallazgo y destrucción de dos construcciones clandestinas dedicadas a la **siembra de plantaciones ilegales en el norte del departamento del Cauca**.

De acuerdo a la información oficial, la primera plantación fue ubicada en la vereda López Adentro en el **municipio de Corinto, Cauca**. En el lugar se produjo el desmantelamiento y posterior destrucción de un invernadero con **6 mil matas de marihuana**.

"Con el hallazgo de este invernadero de 900 metros cuadrados, se pudo afectar financieramente **al sexto frente de las Farc con más de 4 mil millones de pesos**", dijo el Ejército en un comunicado.

El otro hallazgo se registró en el municipio de Toribio, en zona rural de la vereda Cerro Dinamarca, soldados de la Brigada Móvil N°14, registraron la destrucción de un cultivo de **2 mil matas de amapola**, que igualmente pertenecían a los narcoterroristas del sexto frente de las Farc.

El General Wilson Danilo Cabra Correa, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, anuncio que se desarrollan **operaciones militares** en toda la región, con el fin de lograr el desmantelamiento de este tipo de construcciones ilícitas.

Aseguró igualmente, que la lucha contra el narcotráfico se desarrolla en dos frentes de acción, uno el operacional y el otro a través de proyectos productivos, los cuales están generando gran aceptación entre la población civil.

El cultivador o campesino está completamente ausente en la narrativa.

Es un error señalar que el negocio de las FARC es cultivar amapola, desconoce el rol de las personas cultivadoras y el rol de los actores armados, el cual, claramente no es cultivar, sino cobrar por el tránsito/presencia de las plantas y sus transformaciones.

En la noticia, el cultivador o campesino está completamente ausente en la narrativa.

Metáforas letales

Las figuras retóricas no son un adorno; son el mecanismo para enmarcar el problema. El patrón más repetitivo es el uso de metáforas de guerra, enfermedad y desastre natural. Vemos verbos bélicos como "invaden", que personifica a la planta como un ejército enemigo, justificando una respuesta militar. La metáfora de la enfermedad es igualmente recurrente: se habla de la coca como un "cáncer" o una "enfermedad social", lo cual despoja al fenómeno de sus causas sociales y lo presenta como una patología que debe ser "extirpada". Figuras como la "alquimia" (amapola en "oro físico") o la "coca viajera" también deshumanizan el proceso, presentándolo como algo siniestro o imparable, borrando el contexto social.



01 de diciembre de 1991

16 de abril de 2010

Cultivos de coca invaden 3.445 hectáreas de parques naturales en Colombia

La Policía Antinarcóticos afirma que en estas zonas la erradicación debe ser manual.

Las más afectadas son Nukak, La Paya, La Macarena, Paramillo y Catumbo-Barí.

A los ya conocidos problemas que enfrentan los parques naturales colombianos, como la deforestación y el tráfico ilegal de animales, se le ha sumado ahora otro cáncer: se ha sido difícil de frenar, la siembra de cultivos ilícitos.

Se calcula que 3.445 hectáreas de estos lugares que resguardan nuestra biodiversidad, el equivalente a 7 mil campos de fútbol, han sido dañadas o arrasadas para plantar allí matas de coca, según datos entregados a EL TIEMPO por la Policía Antinarcóticos, que en la últimas dos semanas se ha dedicado a verificar en nueve departamentos qué tan efectivas han sido las aspersiones con glifosato que se han hecho allí, en los últimos tres meses, para erradicar los cultivos ilegales.

Las cifras, basadas en los reportes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indican que los sembrados ilegales abarcan en su mayoría al parque nacional Nukak, en el Guaviare, donde se reportan 1.033 hectáreas cubiertas con coca.

Una situación similar vive La Macarena (Meta), donde hay 581 hectáreas afectadas.

Otros lugares en problemas son los parques Paramillo, que abarca zonas de Antioquia y el sur de Córdoba; La Paya (Putumayo); Sierra Nevada de Santa Marta, Munchique (Cauca); Puinawai (Guanía); Utría (Chocó), Tinigua (Meta), Sanquianga (Nariño) y Tuparro (Vichada).

El Catumbo-Barí, en Norte de Santander, es otra zona de reserva donde la coca ha hecho estragos. Allí hay 477 hectáreas dañadas.

Este es el parque en peor situación, porque las áreas cultivadas ilegalmente se han incrementado más de 10 veces.

No se puede usar glifosato

El coronel Henry Gamboa, jefe del programa de erradicación de cultivos ilícitos de la Policía, explicó que a los daños ambientales que implica la siembra de la coca -para cultivar una hectárea se deben talar otras tres de selva virgen-, se suma que estas plantas, por estar dentro de un área protegida, no se pueden eliminar con aspersiones aéreas, sino a través de erradicaciones manuales, lo que hace que la destrucción de las matas se convierta en un trabajo mucho más lento y complejo, que implica grandes desplazamientos de tropa.

De acuerdo con el último reporte del Simci son 15 las áreas protegidas afectadas por los cultivos ilícitos.

Un número que era mayor hace cinco años, cuando según el mismo organismo la coca había invadido 6.100 hectáreas de 16 parques.

La cifra cayó en un 60 por ciento en el 2006 (3.600 hectáreas) y se ha mantenido constante, sin reducciones considerables, hasta hoy.

Teniendo en cuenta que Colombia tiene más de 12 millones de hectáreas incluidas dentro del sistema de áreas protegidas, las hectáreas ocupadas por los narcos no representan ni el uno por ciento del total.

Sin embargo, así haya una hectárea ocupada por los cultivos ilícitos, el diagnóstico es muy grave desde el punto de vista de la conservación.

De acuerdo con Elsyse Morales, asesora de la dirección de la oficina de Parques Nacionales Naturales, "la actividad del cultivo ilícito trae otros delitos ambientales conexos, como la tala". En los últimos 8 años se han perdido más de 158 mil hectáreas de selvas vírgenes en el intento de los traficantes por abrir nuevas zonas de cultivo y darle espacio a la construcción de laboratorios.

"Pero a eso hay que sumar la contaminación de las fuentes hídricas con químicos que son usados para el procesamiento de la coca, el riesgo que existe para los guardabosques y, por supuesto, el impacto sobre la fauna, principalmente las aves, que pierden zonas de anidamiento y alimentación", agregó Morales.

Cocaína escondida en las playas

Los narcos han utilizado las áreas protegidas para el transporte de cocaína entre Colombia y Norteamérica, aprovechando su ubicación y la poca vigilancia que se ejerce en algunas de ellas.

Otras han sido minadas para complicar los patrullajes. Por eso, algunos traficantes han enterrado la droga, para evadir a las autoridades, en playas de áreas como Sanquianga y Tayrona.

"Esto no quiere decir que los parques estén permeados por el narcotráfico, sólo se vuelven plataformas de los narcos para enviar sus cargamentos al exterior", dice Julia Miranda, directora de Parques Nacionales. "Para reducir los cultivos en los parques son clave los programas de erradicación, pero siempre y cuando estén acompañados por proyectos alternativos para que la comunidad no se vea obligada a sembrar más coca para subsistir", agregó.

JAVIER SILVA HERRERA

La editorial utiliza una poderosa metáfora para describir al cultivador de amapola.

metáfora

Lecciones para un aprendiz de narcotraficante

A juzgar por todas las apariencias el que ha de producir la amapola será un nuevo modelo mucho más desestabilizador que los producidos por el actual gobierno.

Los medios oficiales han sido profundos en señalar el incremento que se produce en el cultivo, y cómo por una cadena siguiente la bella flor de las canciones queda de hecho convertida en opio. Cuando pasa de su estado natural a opio, que la transmuta en las frustraciones de un país no inalcanzable.

Entran ya publicados profusamente los textos oficiales, provenientes de uno o de otro organismo de seguridad, en los que se dan las primeras lecciones a los aprendices de narcotraficantes no sólo para su cultivo, sino también para su procesamiento y posterior mercado en los lugares de consumo universal. Se señalan los agentes químicos indispensables para su manejo, con la precisión de sus nombres científicos y los elementos de los laboratorios donde pueda llevarse a cabo la fácil tarea de su elaboración. Cartilla elemental pero de todas maneras apta, desde luego, cuyo radio de acción puede ser enriquecido, según los textos oficiales hasta ahora conocidos, con el sabio concurso de los manuales químicos de uso en la correspondiente facultad de nuestra Universidad Nacional.

El nuevo ministro de Agricultura, a su turno, y así dejar

pasar el momento de su posesión, ha prevenido a los agricultores colombianos de lo altamente rentable que es dicho cultivo, y cómo quien lo emprenda puede llegar a enriquecerse en menos de lo que canta un gallo. Nos previene también, con persuasivo ánimo patriótico de que el país debe agradecer en lo que vale, que de no adelantarnos a sus mortales consecuencias y de no sustituir su cultivo podríamos caer bajo las efectos consecuentes de este nuevo boom económico de la inmortalidad y el enriquecimiento ilícito a costa de la salud universal. El campanazo dado por el nuevo ministro puede obrar, según quien lo oiga, como un estímulo que lleve a falbo, o a los nuevos Páulos, por el camino de regreso a Daznisco, o como una advertencia seria y competente que inhiba a las ánimas puras de la gran mayoría de nuestros compatriotas. Ahí está el misterio.

Pero el problema comienza a emerger, y no ya de la nada. Aparte de las elementales lecciones recibidas por vía oficial, el terreno parece abonado por el humus contaminante de la impunidad. Cuando va ya tanto tiempo sin que se deje a la justicia actuar y los jueces caen en las calles a cada momento abatidos por la furia de los delincuentes comunes, y tienen que ocultar su rostro, en tanto se acomodan las normas legales a los bastardos intereses de los inculpados, lo que queda flotando después de las advertencias de los medios oficiales no parece ser nada distinto a una invitación

a regresar, para mejor decirlo, a vivir.

¿Qué ha hecho hasta el momento el Gobierno en favor del agro colombiano, espejado como es en una virtual política de concesiones para la paz? No mucho en su favor que una ministra jiritec a barcojada el pelo de paso de la familia de un interese criador autóctono, así no lleve la maldición del que montaba Añlla, que no da a crecer la yerba bajo sus cuernos. Hay que hacer indistintamente algo más, en favor del agro y en contra de los presuadidos de la amapola del camino.

¿Por qué no se hace una feria y feria política agraria, que regle cultivos y semillas, técnicas, asesoría técnica y crédito, asesoría y oportuno y comode a su alrededor a tantos agrónomos sin trabajo, biólogos, veterinarios, ingenieros de bosques, y nos hagamos hacer campo a integrarlo con el resto del país? ¿Por qué no se dan los atlavoces oficiales la insinuación del diluvio que amenaza, sin hacer nada para contenerlo?

¿O es que también queremos ver esta guerra antes de darla?

Reflexione, señor presidente de la República. Ya se lo hemos solicitado abundantemente en varios editoriales, con absoluto ánimo patriótico. Retire, y verá que así, irán mucho mejor las cosas.

Esta es una metáfora biológica que deshumaniza el fenómeno; lo enmarca no como un problema social o económico, sino como una enfermedad mortal que ataca a un cuerpo sano (los parques naturales) y que, por implicación, debe ser extirpada.

La coca como "arrasar" o "dañar"

Esta figura retórica enmarca la agricultura de la amapola no como un acto de subsistencia, sino como un proceso casi mágico y siniestro de transformación ("alquimia") en riqueza ilícita ("oro físico"), despojándola de su dimensión social o campesina.

11 de septiembre de 2002

uso de una figura retórica bélica clave: "invaden". Este verbo en el titular personifica a la planta (cultivos de coca) como un ejército enemigo que "invade" el territorio.

Cultivos de coca invaden el Nudo de Paramillo

Las 300 mil hectáreas que conforman el nudo de Paramillo, entre el sur de Córdoba y el Norte de Antioquia, están copadas de cultivos de coca al servicio de los grupos armados ilegales, confirmaron las autoridades.

Por Gustavo Santiago

MONTERIA.—Las 300 mil hectáreas que conforman el nudo de Paramillo, entre el sur de Córdoba y el Norte de Antioquia, están copadas de cultivos de coca al servicio de los grupos armados ilegales, confirmaron las autoridades.

El Comandante de la Policía Córdoba, Coronel José Villalobos Salinas, aseguró que las estadísticas les fueron dadas a conocer a la Dirección de Antinarcóticos de la institución que prepara operaciones de fumigación en esta extensa área donde se reagrupan las Farc Y las Autodefensas.

Esta situación preocupa porque los campesinos son obligados por los grupos ilegales a dejar a un lado los cultivos lícitos para sembrar y procesar coca y corren el riesgo de quedar en medio de la guerra entre paramilitares y guerrilla que se disputan el poder territorial, agregó el Alcalde del Municipio de Tierraalta, Sigifredo Senior.

se refuerza al enmarcar los cultivos como un instrumento de guerra, al estar "al servicio de los grupos armados ilegales", justificando así una respuesta militar.

07 de septiembre de 2016

Este titular es una figura retórica que construye una causalidad directa y simplificada ("Entre más X... más Y").

"Entre más coca, habrán más armas y violencia en el país": Lafaurie

Por - 07 de Septiembre 2016

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, advirtió que la inseguridad sigue en franco ascenso en diferentes puntos de la geografía nacional. La proliferación de la coca, una de las razones. El dirigente, que ha estado visitando diversas regiones de Colombia, se mostró preocupado por la inseguridad rural, pues no hay un solo lugar en el que no le hayan manifestado el delicado panorama que se vive. Actos delincuenciales de todo tipo, pero principalmente de abigeato, tienen azotados a los productores rurales, que ya no saben ni qué hacer ni mucho menos a quien acudir, pues el tiempo pasa y las respuestas a los casos ya denunciados parecen no llegar nunca. (Lea: "El camino a la paz nos lleva de regreso a épocas ya superadas": Lafaurie) En su criterio, una de las principales razones para tratar de explicar el panorama actual es la proliferación de los cultivos de cocaína, situación que se ha venido incrementando por cuenta de las negociaciones que se adelantaron en La Habana y que mermaron el accionar de la Fuerza Pública. "El país está preocupado por el incremento sensible de la inseguridad, pero esto no es casual ni mucho menos algo aislado; por el contrario, obedece a la expansión de los cultivos ilícitos, a que quienes se dedican al narcotráfico encontraron el momento idóneo para crecer exponencialmente", describió. El tema, según Lafaurie Rivera, no debería sorprender a nadie, pues la actual

situación responde a lo que suele suceder en este tipo de escenarios. Entre más coca haya en las diferentes regiones, más armas y violencia seguirán siendo protagonistas de primer orden. Se cuestionó si "¿acaso no negociaron con las Farc la política antidrogas? Con el principal cartel? ¿Cuál paz?". De paso, reiteró que en el país ya son más de 170 mil las hectáreas dedicadas a su siembra. (Lea: La ganadería ha sido desplazada por la mata de coca) El presidente del gremio cúpula de la ganadería lamentó el retroceso del que ha sido testigo el país y aseguró que se precisarán muchos años para recuperar la tierra y poder volverla productiva. "Regresamos a épocas que creíamos ya superadas y volvemos a experimentar sensaciones de las que nos sentíamos libres hace muchos años, como el miedo y la zozobra", sostuvo. De igual manera, pidió que se tomen medidas para evitar el transfuguismo de guerrilleros, algo que ya se viene presentando y que ha hecho que recientemente el ELN venga cobrando tanta fuerza y cometiendo actos delictivos con mayor frecuencia. (Columna: Las hectáreas del delito) "El Gobierno no puede ser indiferente a esa situación. En su afán por firmar a cualquier precio la paz, ha restado margen de maniobra a nuestras Fuerzas Militares y esa laxitud ha servido para que los disidentes de las Farc migren al ELN, sigan cobrando extorsiones y atenten contra la infraestructura del país.", concluyó.

Esta estrategia discursiva es central en el marco de la criminalización: equipara la planta (coca) directamente con la consecuencia (armas y violencia).

Silencia por completo las causas estructurales (abandono estatal, pobreza) y omite la agencia de los actores armados, poniendo la responsabilidad en la planta misma.

Ellos y nosotros

La polarización es una estrategia discursiva recurrente para trazar una frontera moral. El patrón repetitivo consiste en crear un "nosotros" legítimo (el Estado, los ciudadanos de bien, los "verdaderos agricultores") y un "ellos" ilegítimo (las personas cultivadoras). Esta polarización se logra de dos maneras: 1) fusionando al cultivador con el actor armado, como en la narrativa del Plan Colombia, o 2) culpando a la planta/cultivador de atraer la violencia, haciéndolos responsables del conflicto.

Una transición narrativa muy significativa se observa en la era del post-acuerdo. Aquí, el Estado utiliza una nueva estrategia de polarización: redefine el "nosotros" para incluir al "campesino cultivador" (que acepta la sustitución) y traza una nueva línea divisoria para aislar a un "ellos" diferente: los "narcotraficantes". De forma atípica, la polarización también se usa para criminalizar la protesta, como cuando se enmarca una retención de militares como un "secuestro", oponiendo a la comunidad ("ellos") contra el Estado ("nosotros" victimizado).



Año 2002

Este artículo, enmarcado en la era del Plan Colombia, utiliza la fusión del cultivo con el actor armado como estrategia de polarización.

CRECEN CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA

A pesar de las casi 90 mil hectáreas de coca que se erradicaron en el país a lo largo del 2001, Estados Unidos reconoció ayer que los cultivos de la planta en Colombia aumentaron casi un 25 por ciento.

A pesar de las casi 90 mil hectáreas de coca que se erradicaron en el país a lo largo del 2001, Estados Unidos reconoció ayer que los cultivos de la planta en Colombia aumentaron casi un 25 por ciento.

De acuerdo con las cifras recolectadas por la CIA y dadas a conocer ayer por la Casa Blanca, en Colombia fueron detectadas 169.800 hectáreas de coca, 33.600 más que las que habían sido divisadas por los satélites durante el año 2000.

Las cifras de la CIA, sin duda despertarán una intensa polémica justo en momentos en que el Congreso de E.U. evalúa la efectividad de más de 2.000 millones de dólares que se han dado a Colombia en los últimos años y cuyo objetivo central era reducir la oferta del narcótico. De hecho el año pasado, cuando se anunciaron las cifras del 2000, los estadounidenses habían pronosticado que para este año, y gracias al Plan Colombia, se estaría llegando al punto de equilibrio o incluso a una reducción de los cultivos.

Además, los números estadounidenses ocasionarán una seria disputa con las autoridades colombianas que anunciaron la semana pasada, con bombos y platillos, una disminución de los cultivos de coca de un 11 por ciento en comparación al año anteriormente evaluado. Según los datos colombianos, que fueron avalados por la ONU, en el país se pasó de 161.000 hectáreas en el 2000 a 144.800 en el 2001.

Explicación

Al explicar el aumento, la Casa Blanca indica que un tercio del incremento se debió a que se incluyó un área que no se pudo medir durante el 2000 por las malas condiciones climáticas. Además, afirman, se sumaron una gran cantidad de cultivos que ya habían sido fumigados pero que el satélite detectó como coca aún en crecimiento. Estos dos

elementos desataron una fuerte polémica entre la CIA y el Departamento de Estado que frenó la publicación de las cifras durante varias semanas. Para la cancillería estadounidense, la cifra se prestaba a mal interpretaciones pues se estaba incluyendo un área que no se habían podido contabilizar en el período 2000. De acuerdo con la CIA, independientemente de que esta área no fuera evaluada el año anterior, estaban obligados a dar a conocer la sumatoria total de los cultivos presentes en el país.

Aún así, la Casa Blanca catalogó el aumento de preocupante. Tenemos que reconocer que nuestros esfuerzos no han producido los resultados que estábamos esperando. Este dato resalta lo obstinado que es el tráfico y cultivo de drogas en Colombia al igual que la compleja interrelación entre seguridad, control a las drogas y retos económicos. Pero también la necesidad de que E.U. siga comprometido, dicen en un comunicado.

También señalan que el ambiente de inseguridad que se vive en el país está volviendo muy difícil la implementación de los programas antidrogas en Colombia. Aunque no lo mencionan, es claro que se refieren a la participación de organizaciones como las Farc, el Eln y las Auc en el tráfico de drogas y la protección de cultivos.

Y curiosamente, el aumento podría dar la razón a los muchos, tanto en el gobierno Bush como en el Congreso, que ahora quieren ayudar a Colombia a defenderse de la amenaza que plantean estos grupos. No solo por que sus acciones terroristas desestabilizan el país y la región, sino por se han convertido en el principal obstáculo en la reducción de la oferta.

Cifras el país avaladas por la ONU afirman que las plantaciones de coca en Colombia disminuyeron un 11 por ciento.

La narrativa atribuye la dificultad de la erradicación al "ambiente de inseguridad" y la "participación de organizaciones como las Farc, el Eln y las Auc".

Esto alinea con la narrativa histórica que "fusiona deliberadamente al cultivador, el narcotraficante y el guerrillero", justificando el enfoque militarizado.

15 de mayo de 2017

Este es un hallazgo clave donde el actor (Gobierno) habla explícitamente sobre el acto de narrar.

Gobierno aseguró que no estigmatizará a campesinos cultivadores de coca

El presidente Juan Manuel Santos invitó a los campesinos del país, que tienen cultivos de coca, a que se vinculen al programa de sustitución voluntaria y aseguró que el Gobierno no los estigmatizará.

La Fm

mayo 15, 2017 - 10:05 am

Desde el municipio de Briceño, Antioquia, en donde se firmaron convenios con más de mil familias para cambiar la coca por productos lícitos, el mandatario afirmó que el Gobierno cumplirá con los compromisos con los campesinos.

"En lugar de estigmatizar a los campesinos como delincuentes lo que hemos querido es que la gente comprenda que los campesinos tienen que tener una vida digna, y esa es la que les vamos a ofrecer con esta alternativa", dijo Santos.

Además, Santos anunció que el Gobierno continuará con "mano dura" con los otros eslabones del narcotráfico, sin embargo, con los campesinos será todo lo contrario.

El Gobierno utiliza una estrategia de polarización discursiva al trazar una "línea divisoria" entre dos grupos. Al nominar a un grupo como "campesinos cultivadores" (a quienes no se estigmatizará), los separa activamente de los "narcotraficantes" (el "otro" que sí será perseguido).

Esta es la estrategia discursiva que justifica la política de sustitución voluntaria (un "nosotros" válido) frente a la erradicación forzada (un "otro" ilegítimo).

Por su parte, el miembro de las Farc, alias Pastor Alape, manifestó que el programa de sustitución de cultivos ilícitos apenas comienza, aunque reconoció que puede ser muy efectivo para que los campesinos dejen de sembrar coca.

"Es un programa, y usted lo sabe Presidente, yo no puedo mentir, que todavía nos deja en pañales, pero decimos que con la institucionalidad, participando con todas las agencias del Estado vamos poder reincorporar estos territorios", dijo Alape.

Además de firmar estos convenios con las familias de Briceño, el presidente Santos revisó las obras que el Gobierno está adelantando en el municipio y anunció que este programa piloto se replicará en todo el país.

02 de julio de 2020

Este titular activa el marco de la criminalización al definir la acción principal de los "cultivadores de coca" como un acto de coacción: "retenidos" (que, según el texto, el Ejército califica de "secuestro").

Militares retenidos por cultivadores de coca, fueron liberados en el Cauca

El Ejército señaló que denunciará los hechos como un secuestro y aseguró que las tropas lo que buscan es brindar seguridad.

Carlos Quilido

julio 02, 2020 - 10:18 am

Como un secuestro fue calificada por el Ejército la retención de 40 militares por parte de comunidades campesinas dedicadas a la siembra de coca, en hechos registrados en el Cañón del Micay, en límites de los municipios de El Tambo y Argelia, en el departamento del Cauca.

Fueron más de 500 campesinos los que rodearon a las tropas, las expulsaron de un terreno y los retuvieron por varias horas exigiendo su salida del corregimiento.

Tras una intervención de la Defensoría del Pueblo, permitieron que la unidad militar nuevamente pudiera adelantar el patrullaje en la zona.

"Lo que está pasando es porque tienen la coca embodegada sin poderla sacar desde la costa pacífica hasta el exterior", expresó el general Enrique Zapateiro el comandante Nacional del Ejército.

Mientras tanto el director de Indepaz, Camilo González, afirmó que unas 150 toneladas de cocaína al año circulan por el Cañón del Micay lo que genera situaciones como la que se vivió entre cultivadores y tropas del ejército.

Esta narrativa posiciona a los cultivadores como un actor violento que se enfrenta a la Fuerza Pública, creando una polarización clara entre la comunidad (el "otro" amenazante) y el Estado (la víctima).

Para el analista los campesinos son presionados y quedan en medio de las confrontaciones, por lo que la única salida es una sustitución voluntaria y real, algo que hasta el momento no se ha logrado.

"Hay gente buena que quiere entrar a los programas legales, quieren salirse de esa presión que ejercen grupos armados vinculados al narcotráfico, grupos que hacen de la zona una fuente de finanzas y de la fuerza del estado", afirmó González.

El ejército también aclaró que las unidades no adelantaban procesos de erradicación de cultivos en la zona y que se encontraban brindando seguridad a la población, en atención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Ahora se espera que los cultivadores de coca sostengan una reunión con el Gobierno departamental, buscando acuerdos que permitan avanzar en el tema de sustitución.

Lo que no se dice

En la construcción de la realidad mediática, lo que se calla es tan determinante como lo que se dice. Los silenciamientos—o estructuras pasivas— no son simples olvidos editoriales, sino mecanismos discursivos que desplazan sistemáticamente aquellas voces y experiencias que contradicen el marco dominante. El análisis revela que, para sostener la narrativa simplificada del “enemigo interno”, ha sido necesario omitir la complejidad humana del territorio: se han borrado las perspectivas de las mujeres cultivadoras, se han invisibilizado las cosmovisiones de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y se han silenciado las razones históricas y estructurales que empujan a la siembra. Al ocultar estas realidades, y las formas de organización política que de ellas surgen, el discurso oficial logra presentar el cultivo como un acto de mera codicia criminal, en lugar de una estrategia de supervivencia ante el abandono.



24 de agosto de 1996

Graves disturbios ayer en Florencia

Caquetá, fuera de control

- Decretados toque de queda y ley seca en la capital del departamento, que fue militarizada totalmente.
- Pequeños grupos de campesinos lograron romper el cerco militar que protege la capital departamental y se enfrentaron a la Fuerza Pública.
- Asonada en Florencia y disturbios en Belén de los Andaquíes dejan cuatro muertos y por lo menos veinte heridos.
- Destruídas sedes de Telecom, Banco Popular y cien establecimientos comerciales.
- Incendiada y saqueada la casa del alcalde de Florencia; apedreadas la Casa de la Cultura y la Fiscalía.
- Suspendidos diálogos entre comisiones de campesinos y delegados del Gobierno.
- Alcalde de Florencia sindicado a dirigentes políticos de instigar a la población contra los uniformados.
- Ejército insiste en que los desmanes son inspirados por subversivos y milicianos infiltrados.
- Pérdidas sobrepasan los cuatro



➤ Los campesinos exaltados rompieron el cerco militar de la capital de Caquetá y apedrearon varias dependencias oficiales.

mil millones de pesos, según primeras evaluaciones.
➤ Más de diez mil labriegos siguen concentrados en Belén de los Andaquíes, Santuario, El Doncello y otras poblaciones cercanas. 9

Esta es una narrativa de silenciamiento que despoja de motivaciones propias a los campesinos, enmarcando su movilización no como una protesta social legítima, sino como una operación de agitación inspirada por actores armados.

La narrativa oficial, atribuida al Ejército, niega la legitimidad y la agencia de los manifestantes al afirmar que “los desmanes son inspirados por subversivos y milicianos infiltrados”.

01 de marzo de 2002

CIA y Colombia discrepan sobre extensión cultivos de coca

El informe anual sobre narcóticos del Departamento de Estado norteamericano no contiene cifras de cultivos de coca en Colombia, porque la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no los ha entregado, dijeron el viernes fuentes oficiales.

WASHINGTON.— El informe anual sobre narcóticos del Departamento de Estado norteamericano no contiene cifras de cultivos de coca en Colombia, porque la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no los ha entregado, dijeron el viernes fuentes oficiales.

Las estadísticas son cruciales este año porque confirmarán si la estrategia de fumigación apoyada por Estados Unidos con millones de dólares y equipos militares en el sur de Colombia ha dado resultados o fracasado.

Se espera que las cifras de la CIA serán considerablemente más altas que las del gobierno de Colombia, que el miércoles reportó una disminución del 11,4 por ciento en los cultivos de coca, cuyas hojas son la materia prima para la cocaína.

Las cifras colombianas mostraron que hubo el primer descenso en las plantaciones de coca en Colombia, de lejos el mayor productor de cocaína del mundo.

"Nuestro informe de este año no tiene cifras actualizadas sobre Colombia, porque no los hemos recibido", dijo a Reuters una portavoz del Departamento de Estado, al anunciar el envío del informe al Congreso.

Las cifras de hectáreas de cocales se basan en fotografías aéreas y satelitales tomadas y analizadas por la CIA.

Un portavoz de la agencia dijo a Reuters que las cifras se entregarán "en unos días más", sin comentar el retraso.

Fuentes oficiales confirmaron que hay un debate entre el Departamento de Estado y los analistas de la CIA, cuyas cifras apuntan a un aumento o una estabilización, en el mejor de los casos, de la superficie plantada con coca.

Las cifras colombianas señalan que las plantaciones de coca sumaron 144.807 hectáreas al primero de noviembre, comparado con 163.289 hectáreas al 31 de agosto del 2000.

EXITO O FRACASO DE PLAN COLOMBIA

El gobierno del presidente Andrés Pastrana atribuye el descenso a la campaña de fumigación aérea dentro de su Plan Colombia, una estrategia para erradicar cultivos destinados a las drogas y fomentar plantaciones alternativas.

Klaus Nyholm, director en Colombia del Programa de Control de Drogas de las Naciones Unidas, apoyó las cifras colombianas y dijo que creía que las estadísticas de la CIA podrían ser un tercio más altas.

Eso significaría que Colombia produjo más cocaína en el 2001 que en el 2000, pese a que Washington gastó unos 1.000 millones de dólares en los últimos dos años en financiar al Plan Colombia y entregar equipos como helicópteros Black Hawk.

En el 2000, se estima que la producción potencial de cocaína en Colombia fue de 580 toneladas.

La discrepancia en las cifras surge al parecer de las distintas metodologías utilizadas.

El gobierno colombiano defendió el jueves sus cifras. El ministro de Justicia, Rómulo González, sostuvo que eran irrefutables, tanto técnica como científicamente.

El lunes, el funcionario del Departamento de Estado encargado del tema del narcotráfico, Rand Beers, dijo que la estrategia antidrogas en Colombia aún no había dado fruto en cuanto al flujo de cocaína hacia Estados Unidos o una baja en el precio del polvo blanco en la calle.

En el 2001, se fumigaron 85.000 hectáreas de los 136.200 hectáreas de coca. Pero los campesinos suelen replantar las áreas fumigadas, dijo Beers.

Este artículo es un ejemplo claro de silenciamiento.

En esta disputa metodológica entre la "CIA" y "Colombia", los actores (cultivadores, familias) están completamente omitidos, invisibilizando las causas sociales del cultivo.

La narrativa se centra por completo en la métrica ("cifras," "estadísticas," "hectáreas") como la única medida del "éxito o fracaso de Plan Colombia".

01 de noviembre de 2024

Gobierno no solo quiere comprar hoja de coca: borrador de decreto también habla de cultivos de amapola

Sería la primera vez en la historia del país que se viabiliza la posesión y cultivo de las plantas ilícitas.

La polémica propuesta de la compra estatal de los cultivos de coca que lanzó el presidente Gustavo Petro, el pasado 21 de octubre, mismo día en que se publicó el informe de Naciones Unidas, que reveló que la producción potencial de cocaína durante el 2023 había crecido en el país un 53%, tiene ahora un piso jurídico. Un borrador de decreto del Ministerio de Justicia contempla al detalle la ruta a seguir para usar esta siembra ilícita, así como la de amapola, para fines de científicos e industriales.

No es la primera vez que el mandatario sugiere una utilización legal de la hoja de coca. En julio de 2023 dijo que el Gobierno se había propuesto "poner fábricas para comprar" la planta y ofrecerles caminos diferentes a los campesinos que la siembran. Y en noviembre de ese mismo año, el exministro Néstor Osuna consolidó un marco regulatorio para la posesión, licencia de cultivo y autorización de uso de semillas de amapola, coca y cannabis por parte de "entidades" públicas para fines médicos, científicos e industriales, iniciativa que había quedado engavetada.

Luego del segundo anuncio del presidente hace un par de semanas, que volvió a poner el tema sobre la mesa, y se cuestionó su viabilidad, toda vez que la normativa actual no permite el procesamiento de coca fuera de los resguardos indígenas, se conoció el borrador de decreto que tiene listo el Ministerio de Justicia, en cabeza de la ministra Ángela María Bultrago, que sienta las bases jurídicas para llevar a cabo este proyecto.

El documento de 28 páginas estipula el trámite para solicitar las autorizaciones de siembra, posesión de semillas y el uso de las plantaciones nuevas o existentes, tanto por los cultivadores como por las entidades interesadas en su compra. Así mismo, contempla las disposiciones finales de la planta que, de no ser utilizada como materia prima para productos lícitos derivados, "deberá ser destruida por las entidades públicas".

La norma vigente

Actualmente, con relación a la actividad de cultivo, únicamente se cuenta con marco regulatorio especial sobre la planta de cannabis y no respecto de otras plantas de las cuales se producen estupefacientes como la amapola y coca. Sin embargo, hay excepciones, como la protección cultural de

las comunidades indígenas que hacen un uso medicinal de la hoja de coca, para que la cultiven en los territorios, prevalecencia expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).

(Lea además: Colombia perdió el primer semestre del 2024 en erradicación de narcocultivos; apenas van 2.278 hectáreas).

De la misma manera, Colombia está acogida al régimen internacional de prohibición de las drogas de Naciones Unidas, que en 1961 clasificó a la hoja de coca como un estupefaciente. Internacionalmente, el país tiene el compromiso de penalizar la fabricación, el cultivo y producción de la planta para usos diferentes al científico, cultural y agroindustrial. Con este decreto, el Gobierno "reglamentará" el artículo 1 de la Ley 13 de 1974, en lo concerniente a los usos de las plantas de amapola y coca, mediante autorizaciones que permitan la posesión de semillas, el cultivo y el uso de plantaciones que no posean licencia para fines lícitos.

Sería la primera vez en la historia del país que se viabiliza la posesión y cultivo de las plantas ilícitas. Un experimento que tiene limitaciones de orden legal, pues no prevé sanciones, ni rentas tributarias, esenciales para el seguimiento y control de particulares, razón por la que el Gobierno consideró necesario que la titularidad de las autorizaciones recaiga en las entidades públicas.

"Permitir que solo las entidades públicas puedan ser las autorizadas, se considera una manera responsable y prudente de minimizar el riesgo de desvío de las sustancias fiscalizadas al mercado ilícito de drogas, de forma tal que las actividades del proyecto y de la organización étnica o campesina asociada al mismo, se mantengan estrictamente dentro de los límites de la legalidad", anotaron desde el Ministerio.

El articulado

El Consejo Nacional de Estupefacientes seguirá teniendo el control de las autorizaciones para el cultivo y la posesión de coca y amapola. Las entidades públicas tendrán que pasarle la solicitud de acuerdo al tipo de proyecto que pretendan realizar, que puede ser de "comercialización, exportación o transferencia a título gratuito u oneroso de las sustancias o productos".

Esta noticia rompe con un silenciamiento histórico que este documento identifica: el "vacío narrativo" sobre la amapola. Mientras la coca domina el discurso, la amapola suele omitirse.

Este borrador de decreto, al incluir explícitamente los "cultivos de amapola" como objeto de política y mencionar a la "Asociación de Productores de Amapola y Marihuana del Cauca", los posiciona como interlocutores y ya no los omite.

05 de marzo de 2019

El marco narrativo es el de la seguridad internacional, centrado en "cifras récord" y el "aumento de los cultivos de coca" como un problema abstracto.

Este artículo ejemplifica un silenciamiento total de los actores cultivadores.

Preocupación de la JIFE por el aumento de los cultivos de coca en Colombia

- Petro confirma la muerte de Santiago Galán, señalado por el asesinato de Andrés Escobar
- ¿Qué viene para la relación entre Colombia y Estados Unidos?: análisis

Por: Redacción Internet

Publicado el 5 de marzo de 2019, 6:40 a. m. GMT-5

El organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidrogas ha mostrado su preocupación por el aumento hasta cifras récord del cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia.

"Nos preocupa el aumento del cultivo ilícito de arbusto de coca y de la fabricación ilícita de cocaína en Colombia", señala Viroj Sumyai, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en el informe anual de este organismo, presentado hoy en Viena.

En el reporte de este organismo independiente dentro del sistema de la ONU se recuerda que el cultivo de coca sube "constantemente desde 2013, de las 48.000 hectáreas registradas en 2013 hasta las 171.000 en 2017".

El 64 % del incremento de la superficie se concentró en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca, precisa la JIFE.

"Conforme a los datos de incautación, la mayor parte de la cocaína se siguió introduciendo desde los países andinos, en particular desde Colombia, hasta los principales mercados de consumo en América del Norte y Europa", señala el documento.

La JIFE también indica que la producción de cocaína en Colombia pasó de 1053 toneladas en 2016 a 1379 en 2017, y que ese aumento parece haberse traducido en un mayor consumo y disponibilidad en Estados Unidos.

El informe también recuerda que en Colombia se erradicaron 52.000 hectáreas de arbusto de coca en 2017 y que el Gobierno ha presentado un plan quinquenal de erradicación para reducir las plantaciones a la mitad de los niveles de 2018.

No hay mención de "familias", "campesinos" o las "causas estructurales" que llevan al cultivo. Los sujetos sociales desaparecen, y solo queda la planta como una "amenaza".

05

¿QUÉ NO HACER?



El mapeo de medios y discursos oficiales evidencia un conjunto de prácticas narrativas tóxicas que han sido recurrentes. Estas prácticas no son neutras; activamente construyen al cultivador como un “otro” problemático y legitiman las políticas punitivas. **Para desintoxicar la narrativa, es fundamental identificar y evitar activamente estas prácticas:**

- **Fusionar al cultivador con el actor armado o el narcotraficante.** Esta es la estrategia narrativa más perjudicial identificada en el mapeo. Consiste en el uso de términos que funden identidades, como “narcoguerrilla”, o en la atribución directa de la propiedad de los cultivos a grupos armados, silenciando por completo al campesino. Esta fusión despoja a las personas de su identidad campesina, niega sus motivaciones socioeconómicas y las convierte automáticamente en un objetivo militar, justificando la represión.
- **Utilizar un lenguaje que criminaliza la actividad agrícola.** El uso de nominaciones peyorativas como “narcocultivos” o la referencia a los campesinos como “narcos” o “delincuentes” es una práctica común. Este lenguaje borra la distinción entre el campesino de subsistencia y el gran narcotraficante, y encuadra un problema social en un marco puramente delictivo.
- **Recurrir a metáforas de guerra, enfermedad o desastre natural.** El mapeo encontró un uso recurrente de figuras retóricas que deshumanizan el fenómeno. Se habla de cultivos que “invaden” los parques o de la coca como un “cáncer” o una “enfermedad social”. Estas metáforas eliminan el componente humano y las causas estructurales, presentando el cultivo como una plaga que debe ser “extirpada” mediante la fuerza.
- **Silenciar las causas estructurales y la voz de las comunidades.** Una de las omisiones (silenciamientos) más consistentes es la descontextualización. Las narrativas punitivas silencian por qué las comunidades cultivan: el abandono estatal, la pobreza, la falta de vías de acceso y la inviabilidad de las economías lícitas. Al mismo tiempo,

se silencia la voz y la agencia política de las personas cultivadoras, presentándolas como una masa pasiva o, peor aún, como una “fachada” de grupos armados.

- **Medir el “éxito” únicamente en las métricas de erradicación.** El mapeo muestra una fijación narrativa en las cifras de hectáreas y toneladas incautadas. Este marco estadístico invisibiliza la dimensión humana. No se pregunta qué pasó con las familias cultivadoras, si su pobreza se agudizó o si lograron transitar a una economía legal. La persona desaparece; solo queda la hectárea.
- **Basar la narrativa exclusivamente en fuentes oficiales, militares o policiales.** La jerarquía de actores en las narrativas dominantes es clara: la voz de autoridad es la del comandante militar, el almirante, el ministro o el funcionario estadounidense. Esto refuerza el marco de seguridad y presenta una visión unilateral del problema, donde las comunidades son solo el objeto de la política y nunca un interlocutor válido.



06

¿QUÉ SÍ HACER?



Desintoxicar las narrativas requiere una acción comunicativa consciente que contrarreste activamente las prácticas anteriores. El mapeo también identificó contra-narrativas y ejemplos de periodismo responsable que sirven como guía. Con base en estos hallazgos, se recomienda:

- Nombrar para humanizar:** usar “campesinos”, “familias cultivadoras” o “pequeños cultivadores”. La forma de nominación es el primer paso para cambiar el marco. El mapeo muestra que el uso de términos como “campesinos” o “familias campesinas” les otorga legitimidad como sujetos sociales y políticos, en lugar de criminales. Esta nominación, visible en los relatos del postacuerdo o en la cobertura de la protesta social, es fundamental para enmarcar el problema como un asunto social.
- Invertir la jerarquía de actores:** dar prioridad a las voces de las personas cultivadoras. Las narrativas más efectivas para desintoxicar son aquellas que centran los testimonios y las voces de las comunidades. Esto implica citarles directamente, entender sus motivaciones, sus miedos y sus demandas. Al hacerlo, se les saca de la pasividad y se les presenta como sujetos políticos activos que exigen al Estado soluciones.
- Explicar el “por qué”: contextualizar las causas estructurales.** Una narrativa responsable no puede silenciar el contexto. Es fundamental explicar las condiciones históricas y materiales que perpetúan los cultivos: el abandono estatal, la crisis agraria, la ausencia de infraestructura (como vías para sacar productos lícitos) y la pobreza. Esto rompe la causalidad simplista y tóxica que culpa a las plantas de la violencia.
- Trazar una línea clara entre el cultivador de subsistencia y otros eslabones.** Para combatir la fusión de identidades, se debe separar activamente al campesino del narcotraficante y del actor armado. El mapeo encontró ejemplos claros de esta contra-narrativa, como las declaraciones que distinguen el acto agrícola de la producción o consumo de la sustancia. Esto incluye recoger las narrativas que, como la del gobierno en ciertos momentos, trazan una “línea divisoria” para separar al “campesino cultivador” del “narcotraficante”.

- ❑ **Encuadrar el tema como un asunto social, económico y de derechos humanos.** Se debe evitar el marco de seguridad y criminalización. Las prácticas responsables encuadran el fenómeno como un asunto de “protesta social”, “diálogo” o “desarrollo”. Esto implica reportar las movilizaciones como un ejercicio de demanda política legítima, no como “disturbios” o infiltración, y enfocar las soluciones en la reforma rural y los derechos, no solo en la represión.
- ❑ **Visibilizar lo invisible: reportar sobre la amapola y otras realidades olvidadas.** El documento identifica un “vacío narrativo” en torno a la amapola, lo cual es confirmado por el dominio de la coca en el mapeo mediático. Una comunicación responsable debe buscar activamente romper este silencio, tal como algunas políticas recientes han comenzado a hacerlo.
- ❑ **En línea con el enfoque interseccional, buscar activamente las voces de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas** dentro de las economías de cultivo, cuyas realidades suelen ser doblemente silenciadas.



07

CHECKLIST PARA SABER SI ESTOY INFORMANDO DE MANERA RESPONSABLE



Este checklist es una herramienta de autoevaluación rápida diseñada para quienes quieran comunicar o hablar sobre el tema. Su objetivo es ayudar a identificar y evitar la reproducción de narrativas tóxicas antes de publicar un contenido sobre personas cultivadoras.

Use esta lista para verificar que su producto (artículo, reportaje, comunicado, etc.) se alinea con un enfoque responsable y respetuoso de los derechos humanos.

1.

Sobre el contexto histórico y estructural

- Diferencí las trayectorias de las plantas. Evité tratar la coca, el cannabis y la amapola como si fueran el mismo fenómeno.
- Reconocí los usos tradicionales, culturales y medicinales de la coca, asegurándome de no equiparar automáticamente la hoja con la cocaína.
- Expliqué el contexto histórico específico del cultivo (ej. la "Bonanza Marimbera" en el Caribe, o la relación de la amapola con la crisis cafetera).
- Situé el cultivo como una estrategia de supervivencia económica y social, no como una "elección delincencial".
- Vinculé la persistencia de los cultivos con el abandono estatal crónico, la falta de vías, la pobreza estructural y las disputas por la tierra que anteceden a la economía ilícita.

2.

Sobre la caracterización y el enfoque

- Evité hablar del "cultivador" como un bloque homogéneo. Mostré la diversidad de personas y roles (ej. mujeres cabeza de hogar, jóvenes, "recolectores") que participan en la cadena.
- Apliqué un enfoque diferencial, reconociendo que los impactos varían según el género, la etnia (indígena, afrodescendiente) y la edad.
- Reconocí la agencia política y las formas de organización social de las comunidades (ej. Juntas de Acción Comunal, Asociaciones Campesinas, Guardia Indígena, "El Gremio").
- Traté a las comunidades como interlocutores válidos y sujetos políticos, no como objetos pasivos de la política o "marionetas" de los grupos armados.

3.

Sobre la nominación y el lenguaje

- Evité el uso de palabras estigmatizantes, criminalizantes y/o moralistas como "narcocultivador", "raspachín" (usado peyorativamente), "narco" o "delincuente".
- Prioricé el uso de nominaciones que humanizan, como "familias cultivadoras", "campesinos", "pequeños productores" o "comunidades", para devolverles su identidad social.
- Distinguí claramente en el lenguaje al campesino/a que cultiva del actor armado, del intermediario y del gran narcotraficante.

4. Sobre los marcos narrativos y las fuentes

- Evité los encuadres bélicos o punitivos, y el uso de metáforas como "guerra", "plaga", "cáncer" o "invasión" para describir los cultivos.
- Encuadré la situación como un problema social, económico y de derechos humanos, no únicamente como uno de seguridad.
- Fui más allá de la métrica de hectáreas y exploré el impacto humano de las cifras (aumento de la pobreza, desplazamiento).
- Evité basar la historia únicamente en voces de autoridad (militares, policías, funcionarios del gobierno).
- Contrasté las fuentes y di prioridad a las voces de las personas cultivadoras y sus organizaciones.
- Respeté la dignidad y privacidad de las personas involucradas, cuidando su integridad.



08

PALABRAS FINALES



A lo largo de este documento hemos desentrañado cómo el sistema prohibicionista se ha sostenido sobre un pilar fundamental: la construcción de narrativas tóxicas. Hemos visto que el lenguaje no es un simple espejo de la realidad, sino una poderosa herramienta que la moldea, y que en el contexto de la “guerra contra las drogas”, ha sido un arma para justificar la violencia, legitimar el punitivismo y perpetuar la estigmatización.

Pero para desintoxicar, no basta con señalar el veneno; es necesario entender la materia de la que estamos hechos. Por eso, ha sido fundamental sumergirnos primero en las trayectorias de las plantas, para recordar las historias distintas de la coca, el cannabis y la amapola, sus usos tradicionales y cómo la política de drogas impuso una ilegalidad homogénea sobre realidades diversas.

Igualmente, fue crucial superar la cifra abstracta. Necesitábamos ponerle rostro a la estadística, entender quiénes son las personas que cultivan. Al caracterizar el panorama y los roles, vimos que no existe un “cultivador” monolítico, sino una red de vidas: mujeres cabeza de hogar, jóvenes que no encuentran otras opciones, y familias enteras desempeñando tareas específicas —desde la siembra hasta el recolector— para subsistir.

Del mismo modo, el recorrido por los territorios abrió la puerta para recoger las historias complejas del Catatumbo, marcadas por el abandono estatal y la resistencia campesina; las comunidades de la Amazonía atrapadas entre ciclos de extractivismo y violencia; la encrucijada de Nariño, donde la pobreza estructural es más profunda que la economía ilícita; y las disputas superpuestas del Cauca, donde la lucha por la tierra se entrelaza con las economías de la coca, la marihuana y la amapola.

Con ese contexto de quiénes son y dónde están, nuestro análisis de los medios cobró un nuevo sentido. Vimos cómo la fusión deliberada del campesino con el narcotraficante, las metáforas de “guerra” y “plaga”, y el silenciamiento de las causas estructurales, no son simples errores editoriales, sino la reproducción activa de un discurso punitivo que ignora deliberadamente a esas personas y sus contextos.

Pero este análisis también ha encontrado luces. Si bien el marco de criminalización es dominante, no es absoluto. Identificamos transiciones valiosas: momentos en que la voz se les da a las “familias campesinas”, en que el problema se enmarca como un asunto de “protesta social” y “diálogo”, y en que se reconoce a los cultivadores como interlocutores

legítimos. Estas narrativas, aunque aún minoritarias, demuestran que el relato punitivo puede ser desafiado y que existen caminos para construir una comunicación diferente.

Este documento es, por tanto, una invitación a asumir una responsabilidad compartida. La transformación de estas narrativas no es una tarea exclusiva de los medios de comunicación o de los tomadores de decisiones. Es también un llamado a la academia, a las organizaciones sociales y a la sociedad en general para cuestionar los relatos que hemos consumido y reproducido.

El contexto, los hallazgos y las herramientas prácticas como el checklist que hemos compartido buscan ser un aporte para empezar a construir y amplificar esos relatos alternativos. Narrativas que dejen de enfocar la hectárea y comiencen a enfocar a las personas; que dejen de preguntar por la erradicación y empiecen a preguntar por el abandono estatal y la reforma rural.

Consideramos este producto un punto de partida. Es una invitación a seguir investigando y, sobre todo, a actuar, amplificando esas “luces” que encontramos. Desintoxicar las narrativas sobre las personas cultivadoras es un paso indispensable para dismantelar el andamiaje cultural del prohibicionismo y abrir el camino a políticas de drogas basadas, por fin, en la evidencia, la justicia social, la paz territorial y el pleno respeto a los derechos humanos.

No podríamos cerrar este documento sin agradecer a las personas y comunidades que habitan los territorios. A ellas, nuestro mayor reconocimiento por su incansable resistencia frente a la violencia, la estigmatización y el olvido; su dignidad es el corazón y la razón de ser de este trabajo. Extendemos nuestra más profunda gratitud a todas las personas que generosamente compartieron sus saberes, historias y tiempo, participando con sus invaluable aportes en los distintos escenarios de conversación y en las entrevistas. Sus voces fueron la brújula que nos permitió ir más allá del prejuicio y comprender la verdadera complejidad de sus realidades.

Así mismo, queremos hacer una mención especial y agradecer profundamente a Óscar Parra y a su organización, Rutas del Conflicto. Gracias a todas y todos los que, desde sus distintas orillas, siguen apostándole a la construcción de narrativas más justas y a la dignificación de quienes han sido históricamente silenciados.

09

REFERENCIAS



Acaps ORG. «Colombia - Aumento de la violencia armada en Argelia, Cauca». 2023. https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Additional_resources/20231024_ACAPS_briefing_note_Colombia_Increased_armed_violence_in_Argelia_Cauca_Spanish.pdf.

AFP. «EEUU: Cultivos de coca en Colombia alcanzan su mayor nivel histórico». 2018. <https://www.colombia.com/actualidad/internacionales/eeuu-cultivos-de-coca-en-colombia-alcanzan-su-mayor-nivel-historico-195816>.

ASCAMCAT. «Banderas de Lucha Campesina». s. f. Accedido 10 de octubre de 2025. <https://ascamcat.com/>.

Banco Mundial. «Una mirada actual al contexto migratorio y sus determinantes sociales - Nariño». Ministerio de Salud y Protección Social, 2024. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/contexto-migratorio-narino-2024.pdf>.

Barrientos Rivero, Rodolfo Antonio, Ever de Jesús Cantillo Marengo, y Enrique Antonio Calvo Pulgar. «Impacto social de la bonanza marimbera en la Costa Norte Colombiana y en Barranquilla». Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2001. <https://hdl.handle.net/20.500.12442/12185>.

BBC News Mundo. «Qué fue la bonanza marimbera de los años 70 en Colombia y cómo marcó la historia del narcotráfico en el país». 3 de diciembre de 2023. <https://acento.com.do/bbc-news-mundo/que-fue-la-bonanza-marimbera-de-los-anos-70-en-colombia-y-como-marco-la-historia-del-narcotrafico-en-el-pais-9276069.html>.

Britto, Lina. *El boom de la marihuana*. Editorial Crítica, 2022.

Britto, Lina. «El boom de la marihuana : Auge y caída del primer paraíso de las drogas en Colombia». Crítica Colombia, 2022.

Canal 1. «Preocupación de la JIFE por el aumento de los cultivos de coca en Colombia». 5 de marzo de 2019. <https://canal1.com.co/noticias/nacional/preocupacion-de-la-jife-por-el-aumento-de-los-cultivos-de-coca-en-colombia/>.

Cano Isaza, Alfonso. «España, drogadicción y legalización». *Columna* (Bogotá), 1 de diciembre de 1991.

- Caracol Radio. «CIA y Colombia discrepan sobre extensión cultivos de coca». 1 de marzo de 2022. https://caracol.com.co/radio/2002/03/01/internacional/1014937200_129617.html.
- Carlos Espitia y Salomon Majjub. «La economía de la marihuana en el enclave productivo del Norte del Cauca». Indepaz, 3 de mayo de 2024. <https://indepaz.org.co/la-economia-de-la-marihuana-en-el-enclave-productivo-del-norte-del-cauca/>.
- Carvajal Rodríguez, Diana Carolina, José Manuel Alba Maldonado, y Nancy Rodríguez Colorado. «La Coordinadora Nacional de cultivadores de coca, amapola y marihuana del Norte de Santander (COCCAM), una experiencia en la defensa y el desarrollo territorial». *El Ágora USB* 24, n.o 2 (2024): 503-18. <https://doi.org/10.21500/16578031.6812>.
- Chavaco, Michelle. «El Valle del Cauca es el primer departamento con una cadena productiva de Cannabis Medicinal e Industrial». 5 de septiembre de 2021. <https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/72195/el-valle-del-cauca-es-el-primer-departamento-con-una-cadena-productiva-de-cannabis-medicinal-e-industrial/>.
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. «Caso “Campesinos cocaleros y su movilización en 1996: sujetos y territorios en disputa en el conflicto armado colombiano”». CEV, 2022. <https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-08/Caso%20Marchas%20campesinas%20cocaleras.pdf>.
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. «Caso “De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas” Consumo y usuarios de drogas en las violencias y persistencias del conflicto armado colombiano». 2022. <https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-08/Caso%20Guerra%20en%20las%20drogas.pdf>.
- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. «Sufrir la guerra y rehacer la vida: Impactos, Afrontamientos y Resistencias». junio de 2022. <https://doi.org/10.2307/jj.16192328>.
- Connectas. «Los intereses detrás de la guerra en el Catatumbo». *CONNECTAS*, 29 de mayo de 2025. <https://www.connectas.org/coca-frontera-politica-intereses-detras-guerra-catatumbo/>.
- Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, ed. «“Entonces, ¡hablamos!”: informe sobre las afectaciones del conflicto armado a los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, 1971-2021». Editorial Universidad del Cauca, 2022.
- CONtexto Ganadero. «“Entre más coca, habrán más armas y violencia en el país”: Lafaurie | CONtexto Ganadero». 7 de septiembre de 2016. <https://www.contextoganadero.com/politica/entre-mas-coca-habran-mas-armas-y-violencia-en-el-pais-lafaurie>.
- Corte Constitucional colombiana. «Sentencia C-882 de 2011». 2011. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=172258>.
- Cruz, Luis Felipe. «Marihuana en Colombia: del laberinto al club». 14 de septiembre de 2023. <https://www.dejusticia.org/marihuana-en-colombia-del-laberinto-al-club/>.
- Cuesta Astroz, Irina, Gélica Mazzoldi Díaz, y Aura María Durán Díaz. «Mujeres y economía cocalera en el putumayo». Fundación Ideas para la Paz, 2017.
- «Cultivo de coca en Colombia registra su nivel más bajo, con 48.000 hectáreas». 8 de agosto de 2013. <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cultivo-de-coca-en-colombia-registra-su-nivel-mas-bajo-con-48000-hectareas/20130808/nota/1947530.aspx>.
- Defensoría del Pueblo. «El Catatumbo padece la emergencia humanitaria más grande desde que hay registro en Colombia, a causa del conflicto armado». 6 de mayo de 2025. <https://www.defensoria.gov.co/-/el-catatumbo-padece-la-emergencia-humanitaria-mas-grande-desde-que-hay-registro-en-colombia-a-cause-del-conflicto-armado>.
- Díaz, Ana María, y Fabio Sánchez. «Geografía de los cultivos ilícitos y Conflicto armado en Colombia». 2004. <https://www.lse.ac.uk/international-development/Assets/Documents/PDFs/csdc-working-papers-phase-one/wp47sp-geografia-de-los-cultivos-ilicitos.pdf>.
- Dijk, Teun A. Van. «Análisis Crítico del Discurso». 2016.
- El Espectador. «Destruyen dos cultivos de amapola y marihuana de las Farc». 19 de septiembre de 2014. <https://www.elespectador.com/judicial/destruyen-dos-cultivos-de-amapola-y-marihuana-de-las-farc-article-517686/>.

- El Espectador. «El pesebre de marihuana que crece en el norte del Cauca». 2022. <https://www.elespectador.com/colombia/legalizacion-de-la-marihuana-rutas-produccion-y-consumo-en-el-cauca-colombia/>.
- El Espectador. «Gobierno y campesinos acuerdan levantar protesta en Tarazá». Prensa. <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/gobierno-y-campesinos-acuerdan-levantar-protesta-en-taraza-article-304066/>.
- El Espectador. «Lecciones para un aprendiz de narcotraficante». 1991.
- El Espectador. «Ministro de Defensa y altos mandos inician hoy visita oficial a Estados Unidos». 1998.
- El Nuevo Siglo. «Caquetá, fuera de control». 1996.
- El Nuevo Siglo. «Narcoguerrilla, "sicario" de la flora y fauna en el Guaviare». 1996.
- El Nuevo Siglo. «Plan Chirac implicaría precio de sustentación a la coca». 1996.
- El Nuevo Siglo. «Reforma agraria y no represión para el Putumayo». 1996.
- El Nuevo Siglo. «Un escándalo mundial». 1997.
- El Tiempo. «Cultivos de coca invaden 3.445 hectáreas de parques naturales». 2010. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-761250>.
- El Tiempo. «MANTIENEN ULTIMÁTUM CONTRA CULTIVADORES DE COCA». 27 de abril de 2004. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-1577804>.
- Elementa DDHH. «Derechos en contexto Medellín». 2024.
- Elementa DDHH. «Desarrollo rural integral para cultivadores y cultivadoras de hoja de coca». 23 de marzo de 2023. <https://elementaddhh.org/desarrollo-rural-integral-para-cultivadores-y-cultivadoras-de-hoja-de-coca/>.
- Elementa DDHH. «Historia de la prohibición de la hoja de coca». Elementa DDHH, s. f. Accedido 27 de junio de 2025. <https://elementaddhh.org/wp-content/uploads/2021/04/historia-de-la-prohibicio%CC%81n-de-la-hoja-de-coca-VF.pdf>.
- Espitia Cueca, Carlos Eduardo, y Salomón Majjub Avendaño. «La economía de la marihuana en el enclave productivo del Norte del Cauca». Indepaz, 2024. <https://indepaz.org.co/portfolio/la-economia-de-la-marihuana-en-el-enclave-productivo-del-norte-del-cauca-punto-de-encuentro-81/>.
- Espitia-Cueca, Carlos-Eduardo, y Salomón Majjub-Avendaño. «La economía de la marihuana en el enclave productivo del Norte del Cauca». Indepaz, 2024.
- Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. «Cultivos ilícitos y deforestación en la Amazonia colombiana». Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Accedido 12 de octubre de 2025. <https://observatorioamazonia.fcds.org.co/acercamiento-conflictos/amazonia-colombiana/cultivos-uso-ilicito/microficha-cultivos-de-uso-ilicito-en-el-bioma-amazonico-colombiano.html>.
- Fuquen, César. «Seis heridos por enfrentamientos entre Indígenas y cultivadores de marihuana en el Cauca». Colombia. *Infobae*, 19 de mayo de 2023. <https://www.infobae.com/colombia/2023/05/19/seis-heridos-por-enfrentamientos-entre-indigenas-y-cultivadores-de-marihuana-en-el-cauca/>.
- Garzón, Juan Carlos, y Juan David Gélvez. «¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca? - Caracterización de las familias beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)». UNODC - FIP, 2018. https://www.unodc.org/documents/colombia/2018/Agosto/Quienes_son_las_familias_que_viven_en_las_zonas_con_cultivos_de_coca-N.1.pdf.
- Global Protection Cluster. «Análisis de Protección». 2022. https://globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2022-04/pau_narino_-_2022_04_13_-_version_final.pdf.
- Gomez Maseri, Sergio. «Crecen los cultivos de coca en Colombia». 8 de marzo de 2002. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-1361961>.
- González Perafán, Leonardo. «La Hoja de Coca y la Política Antidrogas en Colombia. Caso Cauca y Nariño». Indepaz, 2025. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2025/02/articulo-coca-y-mineria-en-Cauca-y-Narino.pdf>.

- Güiza-Suarez, Leonardo, y Paula Andrea Jiménez Rojas. «Guía para la acción judicial: Deforestación e impactos ambientales por la siembra de cultivos ilícitos». Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», s. f. <https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/biblioteca/Deforestaci%C3%B3n%20e%20Impactos%20Ambientales.pdf>.
- Gutiérrez, Ruth. «Cultivos de coca en Colombia impactos socio-ambientales y política de erradicación». abril de 2018. <https://elementaddhh.org/wp-content/uploads/2021/03/Cultivos-de-coca-en-Colombia-impactos-socio-ambientales-y-poli%CC%81tica-de-erradicacio%CC%81n.pdf>.
- Herney Ruiz. «Coca Chewing Peasants: The Dismissal of Traditional Coca Leaf Consumption». 14 de diciembre de 2022. <https://vistaprojects.com/en/coca-chewing-peasants-the-dismissal-of-traditional-coca-leaf-consumption/>.
- INDEPAZ. «Economías de los conflictos armados en Colombia». 2023. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/05/Economias-de-los-conflictos-armados-en-Colombia.-Punto-de-Encuentro-2.pdf>.
- International Crisis Group. «Raíces Profundas: Coca, Erradicación y Violencia En Colombia». Brussels, 2021. <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/colombia/087-raices-profundas-coca-erradicacion-y-violencia-en-colombia>.
- Kapkin, Sara. «¿Existe una causa común en la Marcha Cannábica de Colombia?» 8 de mayo de 2016. <https://www.vice.com/es/article/existe-una-causa-comn-en-la-marcha-cannbica-de-colombia/>.
- La FM. «Gobierno aseguró que no estigmatizará a campesinos cultivadores de coca». 15 de mayo de 2017. <https://www.lafm.com.co/actualidad/gobierno-aseguro-que-no-estigmatizara-a-campesinos-cultivadores-de-coca-46521>.
- La FM. «Militares retenidos por cultivadores de coca, fueron liberados en el Cauca». 2 de julio de 2020. <https://www.lafm.com.co/actualidad/militares-retenidos-por-cultivadores-de-coca-fueron-liberados-en-el-cauca-210715>.
- Lasso Urbano, Carlos, y Paris A. Cabello-Tijerina. «Dialéctica del conflicto armado en el departamento de Nariño, Colombia en tiempos de paz, lecciones para la construcción de una Paz Histórica». *Justicia* 27, n.o 41(2022): 1-12. <https://doi.org/10.17081/just.27.41.5757>.
- Linares, Esteban y Elementa DDHH. «Cannábicas y cannábicos de Colombia: uníos». 20 de abril de 2023. <https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/cannabicas-y-cannabicos-de-colombia-unios/>.
- Linares, Esteban y Elementa DDHH. «La erradicación de cultivos: otra de las lógicas de la guerra en la naturaleza». 2 de noviembre de 2022. <https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/la-erradicacion-de-cultivos-ilicitos-otra-de-las-logicas-de-la-guerra-en-la-naturaleza/>.
- Majjub Avendaño, Salomón. «Reconfiguración del conflicto armado en el norte del Cauca, sus consecuencias en la regulación de la economía de la marihuana y mecanismos de resistencia y paz del movimiento social». Indepaz, 2025. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2025/06/CONFLICTO-ARMADO-Y-ECONOMIA-MARIHUANA-NORTE-DEL-CAUCA.pdf>.
- María Alejandra Ruiz Ortegón. «La Bonanza Marimbera: crónica de una tragedia anunciada.» Universidad Pedagógica Nacional., 2020.
- Matta Colorado, Nelson Ricardo. «¿Por qué las disidencias de las Farc de Cauca y Valle tienen tanto poder criminal?» *El Colombiano*, 22 de mayo de 2024. <https://www.elcolombiano.com/colombia/por-que-disidencias-farc-cauca-y-valle-tienen-tanto-poder-criminal-CH24542550>.
- Mejía Cáceres, María Angélica. «Representación de Actores Sociales e Ideologías en los discursos del “Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera en Colombia”». Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA), 2018. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6760179>.
- Ministerio de Justicia y del Derecho. «Características agroalimentarias de los cultivos de coca en Colombia». 2011.
- Ministerio de Justicia y del Derecho y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). «Caracterización agroalimentaria del cultivo de amapola y de los territorios afectados». 2018.

- Misión de Observación Electoral. *Informe de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales*. MOE, 2025. <https://moe.org.co/wp-content/uploads/2025/03/20250331-Informe-Anual-de-Violencia-contra-liderazgos-2024-FINAL-Pub.pdf>.
- Monsalve, María Mónica. «Migrar para raspar coca: hasta 22 dólares al día por un trabajo que muchos no quieren hacer en Colombia». 16 de octubre de 2022. <https://elpais.com/america-futura/2022-10-16/migrar-para-raspar-coca-hasta-22-dolares-al-dia-por-un-trabajo-que-muchos-no-quieren-hacer-en-colombia.html>.
- Muro Polo, Adriana, Paula Aguirre Ospina, David Ramírez Ramón, y Valeria Quintana Rodríguez. «Fumigación con Glifosato en Colombia: Efectos, costos y alternativa». Elementa DDHH - Friedrich Ebert Stiftung Colombia, julio de 2020. <https://elementaddhh.org/wp-content/uploads/2023/02/Brochure-glifosato-en-Colombia-ACTUALIZACION-2.pdf>.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). «Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023». Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2025.
- Óscar A. Alfonso R., Jairo A. Granados Z., y Laura S. Téllez B. «Para voltear la hoja. Del moralismo y la criminalización a la industrialización de la coca». s. f. Accedido 14 de abril de 2026. <https://publicaciones.ueexternado.edu.co/gpd-para-voltrear-la-hoja-9789587906141.html>.
- Ospina Aguirre, Paula, y Adriana Muro Polo. «Desintoxicando Narrativas: Kit de herramientas para garantizar el acceso a la información en política de drogas». Elementa DDHH, febrero de 2020. https://colombia.fes.de/fileadmin/user_upload/Desintoxicando_narrativas_final.pdf.
- Ospina, Guillermo Andrés, Jorge Tinajero Hernández, y Martin Jelsma. «Amapola, opio y heroína: La producción de Colombia y México». Transnational Institute, 25 de junio de 2025. <https://www.tni.org/es/publicaci%C3%B3n/amapola-opio-y-heroina-la-produccion-de-colombia-y-mexico>.
- Ospina, Guillermo-Andrés, Jorge Hernandez, y Martín Jelsma. «Poppies, opium and heroin. Production in Colombia». Transnational Institute, 2019.
- Pablo Zuleta y Deysy Lorena Daza. «El mameo de la hoja de coca como una forma nutricional». With Paula Aguirre Ospina. 20 de mayo de 2018. <https://elementaddhh.org/el-mameo-de-la-hoja-de-coca-como-una-forma-nutricional/>.
- Pacifista. «Los rostros de la coca». 2015. <https://pacifista.tv/notas/los-rostros-de-la-coca/>.
- Parada Lugo, Valentina, y Harold Rodríguez. «Ruta de la marihuana en Jambaló: voces de cultivadores y quienes sustituyeron». Text. El Espectador, 9 de julio de 2022. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/marihuana-erradicacion-y-narcotrafico-las-vozes-de-los-cultivadores-y-de-quienes-sustituyeron/>.
- Pérez Trujillo, María Fernanda, ed. «Catatumbo: memorias de vida y dignidad». With Jaime Landínez Aceros y José Rodríguez Vaca. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018.
- Prada Céspedes, Edilma, y Vanessa Teyete. «El pueblo Awá resiste a amenazas como el petróleo y los cultivos de coca». 2022. <https://agendapropia.co/articulos/el-pueblo-aw-resiste-a-amenazas-como-el-petroleo-y-los-cultivos-de-coca>.
- Quevedo Delgado, Sara Valentina. «Gobierno no solo quiere comprar hoja de coca: borrador de decreto también habla de cultivos de amapola». 1 de noviembre de 2024. <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/gobierno-no-solo-quiere-comprar-coca-borrador-de-decreto-tambien-habla-de-cultivos-de-amapola-3395951>.
- Redacción Justicia. «Nariño, puerto de coca en el Pacífico». El Tiempo, El Tiempo, 30 de mayo de 2005. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-1676593>.
- Redaccion Llano 7 Dias. «Cerca de 800 cultivadores de coca protestan por erradicación». 6 de marzo de 2013. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-12651669>.
- Rivera Florez, Guillermo. «Cultivos de coca, conflicto y deslegitimación del Estado en el Putumayo». Mamacoca, 2005. http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Rivera_Guillermo_Cultivos_de_coca_conflicto_y_deslegitimacion_de_%20Estado_en_Putumayo_2003.html.

- Rivera, Nicolás Martínez. «Los desafíos del cannabis medicinal en Colombia | Transnational Institute». 17 de marzo de 2026. <https://www.tni.org/es/publicaci%C3%B3n/los-desafios-del-cannabis-medicinal-en-colombia>.
- Sánchez Gómez, Ricardo. «Relato de la guerra en el Cauca». Friedrich Ebert Stiftung, 2020.
- Santiago, Gustavo. «Cultivos de coca invaden el Nudo de Paramillo». 12 de septiembre de 2002. https://caracol.com.co/radio/2002/09/12/judicial/1031781600_082171.html.
- Serrano, López Miguel, Bibiana Castaño Reyes, Alejandro Triana Sarmiento, y Erika Lombana González. *Caracterización agro cultural del cultivo de amapola y de los territorios afectados - Síntesis de resultados de investigación*. 2018.
- Silva Ávalos, Héctor. «Nariño, Colombia, kilómetro cero del tráfico de cocaína». *InSight Crime*, 2017. <https://insightcrime.org/es/investigaciones/narino-colombia-kilometro-cero-narcotrafico/>.
- Sistema de Información para la Política Criminal. «Tasa de Homicidios (Basada en reporte de homicidios de la Policía Nacional)». Ministerio de Justicia y del Derecho, 2025. <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Paginas/SIPC-Tasa-de-Homicidios-Basada-en-reporte-de-homicidios-de-la-Policia-Nacional.aspx>.
- Thoumi, Francisco. «Las FARC y el campesinado cultivador de plantas ilícitas: dilemas, ideología y decisiones». 27 de enero de 2014. <https://razonpublica.com/las-farc-y-el-campesinado-cultivador-de-plantas-ilicitas-dilemas-ideologia-y-decisiones/>.
- Torres Bustamante, María Clara. «Coca, política y Estado en el caso de Putumayo 1978-2006». Universidad Nacional de Colombia, 2012. https://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/912012/mod_resource/content/2/coca%2C%20politica%20y%20estado.pdf.
- Turkewitz, Julie, y Federico Ríos. «En lo profundo de Colombia, una nueva generación de combatientes se enfrenta por lo mismo: el control del tráfico de drogas». En Español. *The New York Times*, 20 de abril de 2022. <https://www.nytimes.com/es/2022/04/20/espanol/colombia-grupos-armados.html>.
- UNODC. «Análisis de la participación de las mujeres en la cadena de valor del narcotráfico». 2018. <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/G%C3%A9nero/An%C3%A1lisis%20de%20la%20participaci%C3%B3n%20de%20las%20mujeres%20en%20la%20CVN%20del%20narcotr%C3%A1fico%20%281%29.pdf?csf=1&e=cx6ZBD>.
- UNODC. «Colombia Monitoreo de Cultivos Ilícitos 2019». 2020.
- Velásquez, Mauricio, Beatriz Irene Ramos, María Alejandra Vélez, Diana Millan-Orduz, y Vanesa Estefanía Ospina-Ramírez. *Transiciones entre economías (i)lícitas y regulaciones armadas en el posacuerdo*. No. 32. Documento CEDE. Centro de Estudios de sobre Seguridad y Drogas, 2025. <https://cesedpre.uniandes.edu.co/>.
- Velásquez, Mauricio, Beatriz Irene Ramos, María Alejandra Vélez, Diana Millan-Orduz, y Vanesa Estefanía Ospina-Ramírez. «Transiciones Entre Economías (i)lícitas y Regulaciones Armadas En El Posacuerdo». Nos. 2025-32. Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, septiembre de 2025. <https://ideas.repec.org//p/col/000089/021634.html>.
- Viso Mutop. «Impacto del Cannabis en el tejido social de la comunidad indígena en el Norte del Departamento del Cauca». 5 de mayo de 2023. <https://visomutop.org/impacto-del-cannabis-en-el-tejido-social-de-la-comunidad-indigena-en-el-norte-del-departamento-del-cauca/>.
- WRadio. «Cultivadores de hoja de coca y amapola bloquean la vía Cúcuta-Tibú». 11 de abril de 2022. <https://www.wradio.com.co/2022/04/11/cultivadores-de-hoja-de-coca-y-amapola-bloquean-la-via-cucuta-tibu/>.
- Yanez, Rodrigo, Carlos Córdoba, y Daniel Niño. «Análisis de entrevistas realizadas a jóvenes cultivadores de coca y amapola en Colombia, Ecuador, México y Perú.» Centro Latinoamericano para el desarrollo Rural, 19 de mayo de 2021. <https://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2021/07/Reporte-jovenes-cultivadores-FINAL.pdf>.
- Zea Gallego, María Clara, Juliana Castellanos Montaña, y Paula Hernández Vargas. «Desintoxicando Narrativas: Desafiando estereotipos sobre Mujeres y drogas». *Elementa DDHH*, marzo de 2024. <https://elementaddhh.org/wp-content/uploads/2024/04/version-digital-DN-2.pdf>.

ELEMENTA
D D H H

Friedrich
Ebert 
Stiftung

